	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 1 de 75

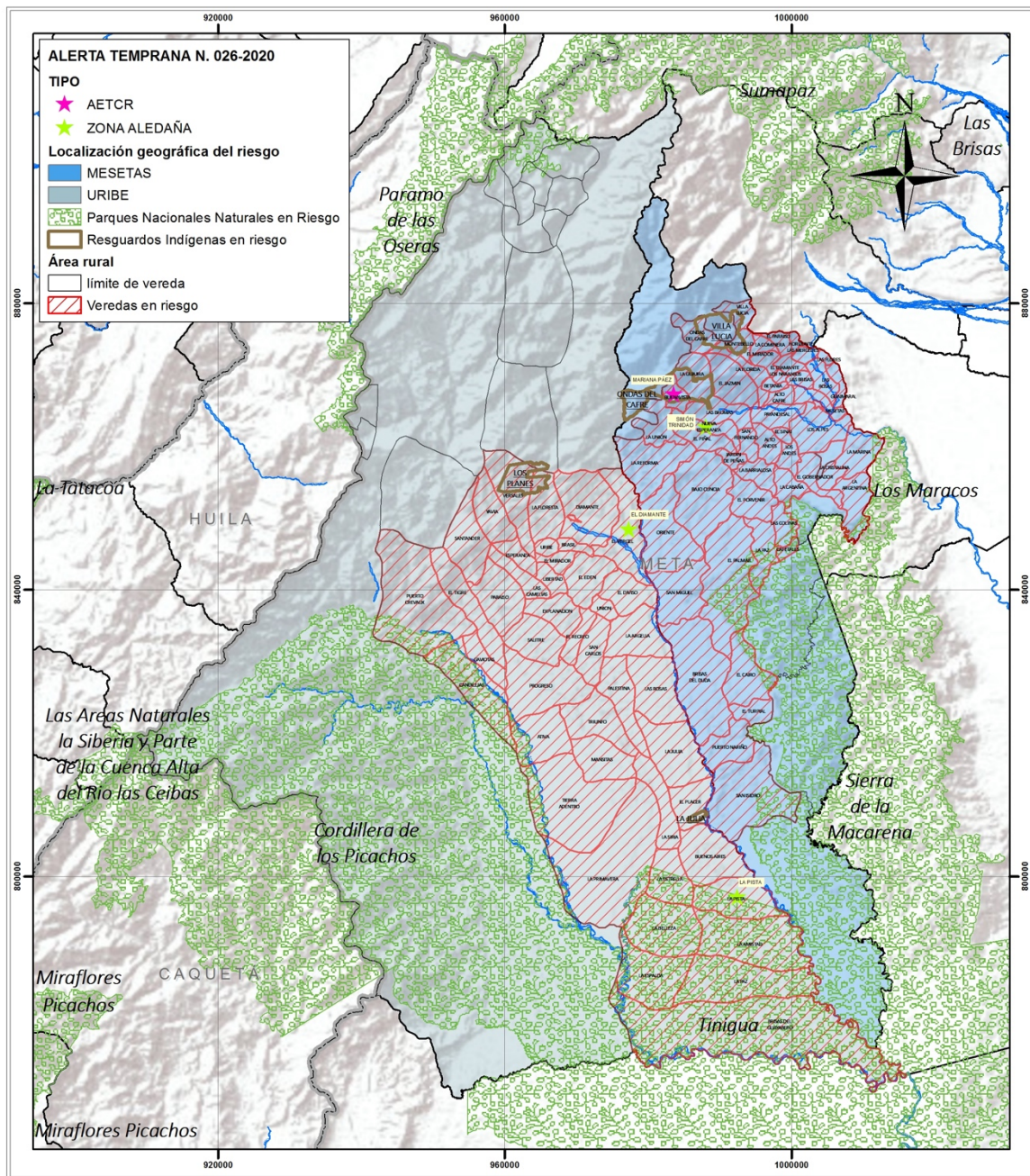
ALERTA TEMPRANA N° 026-2020


Fecha: junio 19 de 2020

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio	Zona Urbana	Zona Rural		Resguardo
		Barrio	Sector / Centro poblado / Inspección.	Vereda	
Meta	Uribe	Centro, Industrial, Jardín y Esperanza.	Inspección La Julia.	La Julia, El Placer, La Pista, La Amistad, La Espalda, La Belleza, La Estrella, La Primavera, Tierra Dentro, Mansitas, Ativá, El Triunfo, Palestina, La Siria, Buenos Aires, Brisas del Guayabero, EL Tigre, Yavia, EL Diamante, El Vergel, EL Diviso, Brasil, EL Edén, Explanación, San Carlos, El Paraíso, Santander, Versailles, las Rosas, La Argelia, La Unión, El Recreo, El Salitre, Gaviotas, EL Progreso, La Floresta, Candilejas, Puerto Crevaux, El Mirador, Esperanza, Las Camelias, Libertad. PNN: Todos aquellos Colonos y Campesinos que habitan en la jurisdicción de los PNN Tinigua y Cordillera de los Picachos	Del Pueblo Nasa: Resguardo Indígena Los Planes. Del Pueblo Embera-Katio: Resguardo La Julia
	Mesetas	El Prado, El Jardín, Villa Lucía, EL Jazmín,	Centros Poblados: Jardín de Peñas, Brisas del Duda,	Jardín de Peñas, Santa Helena, San Isidro, Puerto Nariño, El Turpial, El Cairo,	Del Pueblo Nasa:


Departamento	Municipio	Zona Urbana	Zona Rural		Resguardo
		Barrio	Sector / Centro poblado / Inspección.	Vereda	
		La Cabaña, Barrialosa	Puerto Nariño, La Guajira, La Argentina, La Paz.	Brisas del Duda, Cafetales, San Miguel, El Palmar, La Paz, El Gobernador, Las Brisas, La Reforma, La Guajira, Buena Vista, La paz, La Argentina, El Oriente, La Cristalina, Montebello, El Paraíso, Los Alpes, Horizonte, Las Mercedes, Las Flores, Guaimaral, Mesetas, La Marina, La Cabaña, El Porvenir, Las Colinas, EL Jazmín, Las Brisas, La Unión, Bajo Cúncia, La Frontera, La Cascada, La Unión, El Piñal, Nueva Esperanza, Las Brumas, La Barrilosa, San Fernando, Los Andes, Alto Andes, El Sinai, Payandesal, Alto Cafre, La Florida, Ondas del Cafre, Villa Lucía, La Cominera, El Mirador, Los Naranjos, Betania, Las Rosas, El Diamante. PNN: Todos aquellos colonos y campesinos que habitan en la jurisdicción del PNN Sierra de La Macarena	Resguardo Villa Lucía y Resguardo Ondas del Cafre



	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 4 de 75

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas	<input checked="" type="checkbox"/>	Otra población Civil	<input checked="" type="checkbox"/>
Sexo	Hombres: 10.303 Mujeres: 8.676	Cantidad aproximada	19.912
Grupos sociales vulnerables	<p>Víctimas del conflicto armado, ciudadanos que solicitan restitución de tierras; campesinos sin tierra en procesos de adjudicación; campesinos en Zonas de Reserva Campesina (ZRC), niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ); poblaciones socialmente estigmatizadas (presuntos consumidores de droga, trabajadoras sexuales); desmovilizados, personas en proceso de reintegración (PPR), personas en proceso de Reincorporación (PER), habitantes de barrios populares, habitantes de los antiguos AETCR y de los antes nuevos puntos de reagrupamiento (NPR) hoy ZONAS ALEDAÑAS, ciudadanos Venezolanos.</p> <p>Organizaciones Sociales, Defensoras de DDHH y del medio ambiente (CORPOAMEN, DHOC, ACTARI, ASCATRAL, ARCADUDA, ACATAMU, entre otras), las Juntas de Acción Comunal de los sectores rurales y urbanos de los municipios de Uribe, Mesetas. También, MUCAPOC, Partido Comunista, Marcha Patriótica y Mesas de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado.</p>		
Condición Social y/o Actividad	<p>Líderes y lideresas de comunidades indígenas; Líderes comunales; defensores y defensoras de derechos humanos; miembros de organizaciones de desplazados y víctimas; miembros de organizaciones sociales, campesinas, indígenas (autoridades y miembros de gobierno propio), cívicas y populares.</p>		
<p>Identificación de población en situación de riesgo:</p> <p>Atendiendo a los datos del censo de población 2018 del DANE, el municipio de Uribe - Meta, tiene una proyección de población aproximada para el año 2020 de 9.482 personas, de las cuales 2.170 se encuentran en la cabecera municipal y 7.312 en centros poblados y zona rural dispersa. La población es de 4.827 hombres y 3.722 mujeres. Según datos discriminados por sexo para la proyección 2020 5323 son hombres y 4129 mujeres.</p> <p>Mesetas, municipio circunvecino, tiene una población proyectada para 2020 de 10.430 personas. De esta población 4.409 personas se encuentran en la cabecera y 6.021 en centros poblados y rural disperso. Atendiendo a los datos discriminados por sexo con proyecciones 2020, 5.476 se identifican como hombres y 4.954 mujeres.</p> <p>Dada la complejidad del escenario, se identifican en riesgo toda la población de ciudadanos excombatientes de las FARC EP, quienes actualmente se encuentran en</p>			

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 5 de 75

Proceso de Reincorporación (PER) habiten o no los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y los llamados en su momento nuevos puntos de reagrupamiento (NPR) hoy denominados Zonas Aledañas pero que en todo caso estén residiendo en las jurisdicciones de los municipios de Uribe y Mesetas, en sus centros poblados, cabeceras municipales y zonas rurales, el total de dicha población se estima en 472 personas.

También se identifica en riesgo la población campesina, principalmente aquellos que se relacionen directa o indirectamente con los programas estatales PNIS y PDET a título de beneficiarios o colaboradores y los campesinos habitantes de las Zonas de Reserva Campesina ZRC en proceso y en proyección, ubicadas en las zonas de amortiguamiento de los Parques Nacionales Naturales (PNN).

Los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.


La población indígena de las comunidades asentadas en ambos municipios. Para Mesetas se tiene los siguientes: Del Pueblo Nasa: el Resguardo Ondas del Cafre, compuesto por 75 familias (285 personas). El Resguardo Villa Lucia, compuesto por 68 familias (263 personas) y el Cabildo Sol Naciente, compuesto por 51 familias (180 personas).

Para Uribe se tiene los siguientes: Del Pueblo Misak: Comunidad Indígena Misak “nuevo milenio, compuesta por 22 familias (66 personas). Del Pueblo Nasa, Resguardo Indígena Los Planes, compuesto por 34 familias (126 personas), parcialidad indígena Candilejas, compuesta por 41 familias (140) personas. Del Pueblo Embera, Comunidad - Cabildo Indígena Embera Chami - Vereda Paraíso, compuesta por 37 familias (141 personas). Pueblo Embera Katio, Resguardo La Julia, compuesto por 39 familias (105 personas). El riesgo está dado por la ubicación geográfica de sus asentamientos en zona rural de ambos municipios, ya que se exponen a que, en medio del reposicionamiento de las facciones disidentes de las FARC, sus territorios sean afectados y por consiguiente sus habitantes.

Los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) quienes están expuestos sobre todo a dos circunstancias vulneradoras de sus Derechos Humanos i) Reclutamiento forzado; según monitoreo del SAT facciones disidentes de las FARC desde el año 2018 vienen haciendo invitaciones a los jóvenes a participar en sus filas, con ofrecimientos que inicialmente se estimaron en 300 mil pesos, les ofrecen una moto para realizar trabajos de seguimiento, cobro de extorsiones y compra de remesa. ii) Inducción al consumo e Instrumentalización para el microtráfico.

Los Dignatarios de Juntas de Acción Comunal JAC, expuestos a ser instrumentalizados, con fines de entregar mensajes, citaciones y convocatorias que hacen los actores armados no estatales parte del conflicto facciones en disidencia de las FARC, para el caso de los municipios focalizados, el autodenominado Frente 40 de las mismas.

La población migrante de ciudadanos venezolanos, de la cual se tiene certeza de su permanencia en territorio, pero dado su característica de población migrante y flotante

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 6 de 75

no se tienen cifras oficiales del número de personas para estos dos municipios, sobre todo en la actual coyuntura de emergencia sanitaria con ocasión del COVID-19 donde algunos de dichos ciudadanos han optado por retornar a Venezuela, manteniendo la expectativa de regresar a Colombia.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO


1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO

El territorio de Uribe y Mesetas representó para las FARC EP un territorio histórico por su origen fundacional y con profundo significado simbólico. Adicionalmente, un baluarte geográfico estratégico para el desarrollo de la guerra de guerrillas. A pesar de la salida de esta guerrilla del escenario del conflicto armado no internacional que sufre Colombia, las condiciones sociales de estos dos municipios no parecen haber cambiado sustancialmente. Aún se evidencia la baja capacidad estatal en este territorio que aparentemente dejaba de ser el centro del conflicto armado.

Así las cosas, el territorio de Uribe y Mesetas enfrenta un nuevo ciclo de disputa por el territorio y su población, esta vez a cargo de las Facciones Disidentes de las FARC frentes 1, 7 y 40 (Tercero) que pretenden restablecer a través de imposiciones violentas, el orden social que las extintas FARC EP sostuvieron hasta el 2016. También el asedio de Grupos Armados Organizados Sucesores del Paramilitarismo conocidos como AGC y Bloque Meta, que provenientes desde la subregión del Ariari realizan incursiones esporádicas a las veredas aledañas a los límites municipales con Lejanías, San Juan de Arama, Vistahermosa y las cabeceras municipales.

Sin embargo, las dos amenazas de incursiones de grupos armados organizados en el territorio de Uribe y Mesetas, en la actual coyuntura, expresa la confluencia de factores estructurales de la historia regional con intereses particulares soportados en las contradicciones sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales sin resolver. Podrían sintetizarse algunas de ellas de la siguiente forma:

- Un orden social violento e ilegal que establecieron las FARC EP, interrumpido por el proceso de negociación con el Gobierno Nacional, que el Estado no ha logrado llenar completamente, y que, ante el vacío propiciado, quiere ser continuado y aprovechado por otros grupos armados organizados.
- Preponderancia de la respuesta militar por parte del Estado, para mitigar amenazas y conflictos socioambientales, bajo un enfoque de seguridad nacional, sin considerar respuestas a los otros factores estructurales que determinan la población y el territorio.
- Precario funcionamiento del Estado social y de derecho en el territorio que impide el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos residentes en él.
- Condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales del territorio, sin resolver por parte del Estado: indefinición de derechos de propiedad sobre la tierra, conflictos socioambientales activos (campesinos/colonos/ganaderos Versus áreas protegidas o de

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 7 de 75

reserva, PNN, CAR, etc.), zonas de reserva campesina sin reconocimiento jurídico, entre otros.

- Débil infraestructura de bienes y servicios públicos, comunicaciones, asistencia técnica y financiera, entre otras, para soportar e impulsar el desarrollo agropecuario, ecoturístico, comercial y de servicios.

- Alta presión por los recursos naturales del territorio:

- *Tierra: disputa por los baldíos de la nación, zonas de reserva campesina, ganadería extensiva, PNN, construcción de infraestructura, narcotráfico y minería.

- * Medio ambiente: el Estado ha desplegado estrategias y programas de protección ambiental con fines de evitar ampliación de frontera agrícola y de cultivos de coca.

- * Minería: interés en desarrollar exploración y explotación de recursos mineros (hidrocarburos, metálicos, etc.) en el territorio, tanto de interés público como de empresas privadas, nacionales e internacionales.


A partir de la convergencia de estos factores estructurales con las actuales contingencias de surgimiento o reconfiguración de grupos armados, la dinámica de la violencia y las estrategias militares, vuelven a retomar la forma de escenario de guerra con expresiones de violencia constante contra la población civil y de afectación a sus derechos humanos. En este sentido, para entender la amenaza que dichos grupos armados organizados realizan en el territorio, se describe a continuación sus estructuras, intereses estratégicos y tácticos y su proceder en relación con la población civil.

I. Las Facciones Disidentes de las FARC, frentes 1, 7 y 40 (Tercero):

Las Facciones Disidentes de las FARC surgen simultáneamente a partir de la firma del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC EP a finales de 2016. Inicialmente, mientras se reconfiguraban y consolidaban en los territorios que antes dominó el bloque Oriental de las FARC EP y en la medida que ha transcurrido el tiempo, los frentes 1, 7 y 40 se han extendido a estos territorios, evidenciando áreas específicas de influencia.

Las Facciones Disidentes de las FARC buscan que Uribe y Mesetas vuelva a ser el epicentro articulador de los diferentes frentes que quieren reinstalar, tal como en otrora los tuvo las FARC EP en esta región. De lograrlo, podrá extenderse hacia el interior del país (valle del alto Magdalena y al Sumapaz para acceder al altiplano de Cundinamarca), con los Llanos Orientales, las sabanas del Yará y la Amazonía (Guaviare y Caquetá).

El autodenominado Frente 40 (que en ocasiones es descrito como frente Tercero), ha logrado consolidarse como actor protagónico en casi toda la jurisdicción de los municipios de Uribe y Mesetas. Este frente se encuentra al mando de alias “Calarcá”. Mientras que los frentes séptimo y primero, han concentrado su presencia y acciones hacia el sur del departamento del Meta con influencia en las zonas compartidas del sur de La Macarena con San Vicente del Caguán (Caquetá) y el departamento del Guaviare al oriente. Eventualmente operan de manera articulada con el frente 40 (Tercero) en

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 8 de 75

jurisdicción de Uribe y Mesetas, cuando por estrategia lo deben hacer, ubicando su presencia principalmente, sobre ambas márgenes de los ríos Duda y Guayabero.


Buscan una estrategia de copamiento y re-instalación del orden social y militar establecido por las extintas FARC EP, de cara a su reconfiguración y continuación como las “genuinas” FARC EP. De allí que procuren recuperar lo que consideran sus territorios de retaguardia estratégica, para conectarse a través de la cordillera oriental hacia el interior del valle interandino del alto Magdalena en los departamentos del Huila y Tolima y por el Sumapaz hacia Bogotá y Cundinamarca.

En la jurisdicción de Uribe y Mesetas, las Facciones Disidentes de las FARC han venido copando a modo de tenaza sus jurisdicciones territoriales. Desde la zona del Guayabero y sierra de la Macarena han venido cercando la zona de piedemonte, donde se ubican los principales centros poblados y las cabeceras municipales. En este avance han realizado homicidios selectivos de la población que consideran tiene antecedentes con su organización, excombatientes que se niegan a acceder a sus pretensiones u otras personas que no contribuyan forzosamente a sus demandas. Lo anterior se observa en los casos de homicidios, atentados perpetrados, amenazas e intimidaciones vía panfletos o llamadas o mensajes por las redes sociales que se han identificado en los últimos meses.

El reposicionamiento del frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC, pretende restablecer el orden político, económico, social y cultural, que la insurgencia fariana logró establecer en toda esta vasta región del Meta, Caquetá y Guaviare hasta el 2016, para capitalizar las rentas ilegales del narcotráfico y otras economías subrepticias. De allí que detrás de cada acción de este grupo armado ilegal, exista el propósito político de desestabilizar la región, haciendo que la percepción de la ciudadanía y de la comunidad internacional sea la de un proceso de paz fallido y de un Estado débil, propiciando con dicha estrategia la legitimación de su orden ilegal paralelo que le disputa la autoridad al gobierno, sobre todo en las zonas rurales de los territorios focalizados.

En lo económico, les resulta necesario aprovechar las condiciones marginales del territorio frente a los mercados nacionales o regionales del departamento del Meta (Villavicencio). Esta marginalidad y aislamiento económico, ha sido propicia para promover y continuar actividades extractivas y de enclave económico; entre ellas las de economías ilícitas que alimentan los mercados de la criminalidad transnacional, como es el narcotráfico, entre los más rentables. También usufructuar las actividades de la economía formal, como es la ganadería extensiva y el mercado de tierras ocupadas sin derechos de propiedad, extrayendo rentas de la comercialización de ganado y la tierra, al imponer a los campesinos tarifas por cada semoviente vendido y por cada vez que alguien venda una finca. Estas prácticas se han generalizado impositivamente sobre todo en la zona sur del Departamento del Meta donde también operan dichos frentes.

La vasta extensión y condiciones de selva tropical existente en el territorio, aptas para la siembra de coca, extensas áreas de colonización sin derechos de propiedad definidos, una creciente masa de campesinos sin tierra y desarraigados, una creciente necesidad

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 9 de 75

de ingresos para satisfacer necesidades básicas y una potencial demanda de narcóticos en los mercados de la criminalidad organizada internacional, conforman un ecosistema propicio para desafiar al Estado y desarrollar un modelo autónomo de generación de cuantiosas utilidades financieras, las cuales contribuyen a financiar sus actividades subversivas.


A partir del fortalecimiento militar, también se asegura el monopolio de las rentas ilícitas. Asimismo, se logra el control social y territorial de la población asentada en tales territorios. A partir de la imposición de regulaciones violentas en la conducta y demás quehaceres cotidianos de la población, se logra constreñirla para desarrollar a plenitud la explotación del conjunto de economías ilegales que además del narcotráfico, se suman el narcomenudeo, la minería ilegal, las exacciones y extorsiones.

Para garantizar su completa legitimidad en la población y el territorio, también han infiltrado mediante coacción e intimidación violenta todos los espacios de participación social y de ejercicio de justicia comunitaria. Lo anterior se realiza a través de las Juntas de Acción Comunal e instrumentación de los dignatarios comunales, para que sean sucedáneos con sus directrices insurgentes. Estos espacios de organización y representación campesina se han convertido en instancias de alto riesgo para los liderazgos y derechos fundamentales de quienes las presiden. Su instrumentación por parte del grupo armado ilegal expone a quien se niegue a acatar los mandatos del orden impuesto.

El ejercicio de justicia y resolución de conflictos comunitarios está atravesado por la injerencia del actor armado en los patrones de conducta que se deben cumplir. Como si se hubiera instituido un manual de conductas para los residentes del territorio, la población se ve coartada en sus derechos y en su voluntad a tener que hacer lo que el grupo armado le impone, a nombre de una supuesta decisión comunitaria, como si en tales decisiones todos y todas participaron y estuvieron de acuerdo. Para afianzar los mecanismos de control territorial y social, tales grupos imponen sus propios parámetros sobre la manera en que los campesinos pueden acceder a la tierra, bien sea resolviendo conflictos sociales (vecinales, de linderos, familiares etc.). De igual manera, la imposición violenta para dirimir controversias surgidas en torno a la actividad ganadera.

II. Los Grupos Sucesores del Paramilitarismo, Bloque Meta y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (A.G.C.)

Históricamente las FARC EP establecieron sus zonas de dominio en los municipios de Uribe y Mesetas, imponiendo de facto fronteras con los otros municipios vecinos donde el paramilitarismo logró insertarse. En la actual coyuntura, los Grupos Sucesores del Paramilitarismo, específicamente el Bloque Meta y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (A.G.C.), realizan eventuales incursiones a la jurisdicción de Mesetas y Uribe, traspasando tales fronteras de otrora, con la intención de explorar los corredores estratégicos de los circuitos ilegales del Narcotráfico. No es desdeñable que en cualquier momento los grupos sucesores del Paramilitarismo ingresen de manera más decidida al territorio que ahora controla el frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 10 de 75

De lograr penetrar las fronteras municipales de Mesetas y Uribe, bien sea el Bloque Meta y/o las A.G.C., es factible la exacerbación de la violencia letal, materializada en homicidios, tanto selectivos como múltiples, desapariciones forzadas, afectaciones como consecuencia de las acciones bélicas (atentados con minas y/o armas trampa y MUSE), enfrentamientos con interposición de población civil, utilización de métodos para generar terror e intimidación en la población civil (amenazas mediante panfletos, mensajes de texto y verbales), destrucción de bienes civiles, desplazamientos forzados y utilización ilícita y reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y población vulnerable.

-----ooo-----


En conclusión, la conjugación de factores estructurales y demás condiciones coyunturales relacionados con las dificultades para el acceso a la justicia y a los demás mecanismos del estado social de derecho, la débil infraestructura socioeconómica que contribuye a desestimular la generación de ingresos por la vía legal y precarizar aún más las condiciones laborales, de por sí altamente informales, y una intervención diferenciada del Estado donde predomina el uso de la fuerza sobre las políticas públicas dirigidas a superar las profundas condiciones de vulnerabilidad y fragilidad en derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, configuran todo un círculo vicioso que contribuye al robustecimiento y perpetuación de los grupos armados generadores de violencia.

La consecuencia, la configuración de un escenario de riesgo para la vulneración de los derechos humanos de quienes allí habitan, el cual presenta algunas expresiones específicas en los municipios de Uribe y Mesetas:

1. Vulneración de Derechos en torno a la propiedad, ocupación y posesión de la tierra.

Esta circunstancia para los municipios de Uribe y Mesetas ya ha sido advertida en la Alerta Temprana de inminencia No. 047-18 A.I. en mayo de 2018. Lo anterior como consecuencia del desplazamiento masivo del que fueron víctimas un grupo de aproximadamente 24 familias, alrededor de 54 personas, que habían decidido retornar a la vereda Ativá de Uribe, las cuales desde la década de los 90, las FARC EP los expulsó de sus tierras. Su retorno se realizó de manera progresiva, desde octubre de 2017 hasta mediados de mayo de 2018. Sin embargo, en este último mes se vieron obligados nuevamente a abandonar sus tierras, debido a la intimidación y amenazas por parte de presuntos integrantes del frente 40 (Tercero) de las Facciones Disidentes de las FARC.

La Defensoría del Pueblo observa con mucha preocupación que en la actualidad continúa el modelo de patrocinar prácticas de ocupación de predios rurales, por familias que arriban a la zona rural de Uribe procedentes de otros lugares del país. Estas familias ocupan predios, talan zonas protegidas y desconocen a quienes se reputen dueños o poseedores de las tierras ocupadas. Entre las evidencias se puede referir lo ocurrido en la vereda Ativá del municipio de Uribe, a la que han llegado familias al parecer

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 11 de 75

procedentes del departamento del Caquetá desde mediados del año 2019. Dichas familias (aproximadamente cuatro), se han establecido entre el río Guayabero y caño Danta.

Esta situación ha motivado que los poseedores de dichos predios instauren denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por la invasión y por la tala de varias hectáreas de bosques. Entre los casos que sirven de antecedentes de esta situación, se puede enunciar el homicidio del señor Álvaro Medina Camacho ocurrido en la vereda Ativá en abril de 2017. Este caso se relaciona con la reclamación que por medio de querella hace una sociedad comercial en unos terrenos que unas familias reclaman como suyos y que las FARC EP, en negociaciones, les entregó. La compañía que reclama el predio envió al señor Álvaro Medina como encargado, y en el ejercicio de dicha representación, resultó muerto.


Respecto al despojo violento de predios, la población campesina vive con temor constante ante la advertencia de alias Romaña, quien amenazó luego de apartarse del proceso de Paz, que regresaría a recuperar las tierras que antes ocupaban las FARC. Dicha advertencia se focaliza en todas las veredas localizadas entre los ríos Duda y Guayabero, constituyendo un corredor de Sur a Norte, que conecta áreas del Parque Tinigua con zonas del Sumapaz. En este corredor veredal se encuentra Ativá, que junto a las demás veredas aledañas (Tierradentro, Mansitas, El Progreso, El Triunfo, La Primavera, entre otras), también sufren el despojo violento de predios rurales, la promoción de compras informales de propiedades y la ocupación de baldíos. El incentivo a los procesos de colonización en las zonas protegidas se mantiene en Uribe y se expandió a Mesetas.

2. La circulación de panfletos amenazantes que generan terror en la población civil.

Todos los grupos armados organizados que tienen presencia en el departamento del Meta y particularmente en Uribe y Mesetas, utilizan como instrumento de amenaza e intimidación los panfletos para generar temor y zozobra en la población civil.

En el caso de las Facciones Disidentes de las FARC, estas han mantenido la misma táctica de comunicación subversiva y clandestina, que sostuvieron las FARC EP. En los últimos meses han promulgado sendos panfletos, bien sea emitido bajo el rótulo de “Boletines” seriados o de “comunicados”, en la jurisdicción de los municipios Uribe y Mesetas, con alcance a los demás municipios vecinos. A través de estos mecanismos intimidatorios el grupo armado ilegal controla las dinámicas y realidades sociales, políticas y económicas del momento en los territorios objeto de su accionar. Se abroga a través de ellos facultades para impartir órdenes en aspectos claves para el desarrollo de la vida cotidiana de la población civil, pero con incidencia en la realidad regional.

La existencia y circulación de un panfleto amenazante de las Facciones Disidentes de las FARC en el territorio de influencia de la Serranía de La Macarena, se corresponde con los mecanismos de intimidación y amenaza que este grupo viene utilizando contra la población civil y sus quehaceres de vida cotidiana; dichas conductas por este tipo de

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 12 de 75

mecanismos, ya han sido incorporados en análisis de escenarios de riesgo anteriormente advertidos, como por ejemplo en la AT 042-18 para el municipio La Macarena.


A partir de la lectura de estos libelos, también es posible inferir cómo las Facciones Disidentes de las FARC han logrado reconfigurar organizacionalmente sus estructuras armadas; la mayoría de los panfletos que se han conocido, se identifican con la autoría de “Unidad John Linares del Frente Comandante Jorge Briseño” (sic), y mantienen la sigla FARC EP.

Uno de los Panfletos distribuidos, en su encabezado se define como “comunicado público”, calendado el 10 de abril de 2020, a nombre de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC EP, Unidad John Linares - Frente Comandante Jorge Briseño” (sic). En su contenido rechazan la presencia de las organizaciones internacionales OEA y USAID, así como operadores de sus proyectos como: Misión Amazónica, Gilbert Austria, Instituto Amazónico de Investigación científica (SINCHI), la Corporación para el Desarrollo de la Amazonía (CDA), Cormacarena y Parques Naturales Nacionales (PNN). Además, les advierten a las comunidades campesinas que, de colaborar con cualquiera de éstas entidades o hacer parte de sus programas y proyectos, serán declarados objetivo militar.

El panfleto también menciona una serie de condicionamientos para la población que reside en su área de influencia: para quién acceda al territorio, para quienes realicen tala de selva en la zona que denominan montaña, en lo que normativamente corresponde a zonas de reserva. Las condiciones expuestas son descritas a modo de amenaza, cuyos parámetros ambientales, indicaciones de tiempos mínimos de explotación de predios baldíos o talados y para la comercialización de predios (venta), contemplan acciones violentas como la expulsión para quienes las incumplan.

Otro de los ejemplos claros que evidencia cómo los panfletos amenazantes también sirven para anunciar la imposición de restricciones a la libre movilidad, se imparten condicionamientos a transportadores y se restringe el ingreso de personas provenientes de otras regiones del país, fue el ocurrido a partir de la actual crisis sanitaria por la que está atravesando todo el territorio nacional. A raíz del conocimiento del primer caso de contagio por COVID-19 reportado en el municipio de Mesetas, el frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC emitió un panfleto con el nombre de “Boletín 003”, mediante el cual impuso “toque de queda”.

También en los aspectos de incidencia en la implementación de los Acuerdos de Paz, las Facciones Disidentes de las FARC han emitido panfletos amenazantes, con la autodenominación “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC EP, Unidad John Linares - Frente Comandante Jorge Briseño” (SIC). En ellos se registra una serie de advertencias y declaratorias contra presuntos “objetivos militares” en las que se encuentran entidades del orden nacional e internacional, organizaciones no gubernamentales y población civil; sobre todo para los campesinos(as) que no acaten los parámetros impuestos mediante dichos panfletos.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 13 de 75

Adicional a las circunstancias de amenazas anteriores, también se han identificado otras dirigidas a la población socialmente estigmatizada, como los consumidores de sustancias psicoactivas, para atentar en su contra; también contra líderes/as y defensores de derechos humanos que inciden en los territorios de ambos municipios. En esta circunstancia, aunque en menor proporción, también se incluye a los grupos sucesores del paramilitarismo, como autores de panfletos amenazantes contra población socialmente estigmatizada y líderes/as y defensores de derechos humanos, que, aunque no son tan frecuentes como los emitidos por las Facciones Disidentes de las FARC, circulan y generan igual terror y afectación a la población civil.

3. Riesgo para los excombatientes de las FARC EP. En lo que respecta a los ciudadanos excombatientes de las FARC E.P., preocupan tres situaciones fundamentales:

a) La vulneración de los derechos fundamentales de las personas en proceso de Reincorporación (en adelante PER) que se encuentran viviendo o no, en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), hoy en tránsito a centros poblados, y en los espacios que en su momento se catalogaron como Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR), hoy en día llamadas Zonas Aledañas. Dichas vulneraciones se materializan en estigmatización, amenazas y homicidios selectivos. Al respecto cabe anotar que, dentro del periodo comprendido entre noviembre de 2018 a abril de 2020, han ocurrido cinco homicidios de excombatientes de las FARC, en jurisdicción de los municipios de Uribe y Mesetas, cuatro de ellos selectivos y uno más en hechos de intolerancia.

b) Las condiciones o factores de vulnerabilidad sociales, económicas y territoriales que rodean el proceso en el que se encuentra las PER que habita en dichos espacios territoriales, surgidas esencialmente por algunas circunstancias pendientes por resolver, como la implementación de una ruta escolar permanente y oportuna, el acceso a instancias medicas de calidad, la orientación y capacitación para aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

c) Las amenazas contra su vida e integridad personal que tienen que afrontar por parte de las Facciones Disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo como el Bloque Meta y A.G.C., quienes los presionan para que hagan parte de los mismos. Como se evidencia, dichas amenazas ya se han materializado en cuatro homicidios selectivos y pueden seguir materializándose. Lo anterior tomando en consideración la presunción de riesgo extraordinario desarrollada a través del decreto 299 de 2017.

Como consecuencia de las tres anteriores expresiones de riesgo, es altamente probable que las estructuras que se autodenomina frente 40 (Tercero) de las Facciones Disidentes de las FARC, cometan acciones que vulneren los derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad personal de la población civil de los municipios de Mesetas y Uribe. Acciones que pueden ser apoyadas eventualmente por los frentes primero y séptimo, también de las Facciones Disidentes de las FARC. Adicionalmente, los grupos sucesores del paramilitarismo, Bloque Meta y AGC, también se pueden identificar como una amenaza o fuente de riesgo para este grupo poblacional.

En síntesis, la identificación de los escenarios de riesgo contemplados en la presente Alerta Temprana pretende advertir y prevenir afectaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, así como infracciones al derecho internacional humanitario, en los municipios de Uribe y Mesetas. Particularmente en los siguientes grupos poblacionales bajo riesgo: los campesinos en situación de vulnerabilidad, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), los líderes/as y/o defensores/as de derechos humanos, los indígenas habitantes en los Resguardos y comunidades étnicas que habitan fuera de resguardos o sin resguardo titulado, la población de excombatientes en Proceso de Reincorporación (PER) y en fuera Proceso de Reintegración (PPR); de igual manera, los funcionarios de entidades del Estado relacionados con derechos humanos (Ministerio Público), de protección ambiental (Ministerio de Ambiente, ANLA, CAR, PNN, CDA, SINCHI, I. A. Von Humboldt), empleados de agencias nacionales e internacionales de cooperación; y de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente que tienen incidencia en jurisdicción de Uribe y Mesetas.

2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO

ACTORES ARMADOS NO ESTATALES PARTE DEL CONFLICTO


Facciones Disidentes de las
FARC: Frentes 1º, 7º y 40
(Tercero).
Grupos Sucesores del
paramilitarismo: Bloque
Meta v A.G.C.

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.

- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, violencia sexual)
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS (ataque indiscriminado - accidentes por minas y/o armas trampa - enfrentamientos con interposición de población civil)
- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA POBLACIÓN CIVIL
- DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL.
- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL.
- RECLUTAMIENTO FORZADO

4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS

- A LA VIDA
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL
- A NO SER DESAPARECIDO

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 15 de 75

- A LA LIBERTAD PERSONAL
- A NO SER DESPLAZADO
- AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
- A LA LIBRE CIRCULACIÓN
- A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA
- A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE
- A LA LIBRE ASOCIACIÓN.

VALORACIÓN DEL RIESGO

1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO.

1.1. LAS CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES DEL TERRITORIO

Los municipios de Uribe y Mesetas hacen parte de la Subregión Macarena (Ordenanza Departamental No. 851 de 2014). Su jurisdicción territorial también hace parte de una extensa Zona Protegida denominada Área de Manejo Especial de La Macarena (en adelante AMEM), que se encuentra ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. El 90% del área de AMEM se ubica en el extremo suroccidental del departamento del Meta y el 10% en el Guaviare.

Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), “Administrativamente, el área cubre la totalidad de los municipios de: El Castillo, El Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe y Vistahermosa; y parcialmente los municipios de: Guamal, Granada, Fuentedeoro, Puerto Lleras y San Luis de Cubarral”¹. Además de la cobertura de los 15 municipios del Meta, incluyendo Uribe y Mesetas, hacen parte tres (3) municipios del departamento de Guaviare. Los municipios de La Macarena, Uribe y Vista Hermosa concentran el 51,2% del área del AMEM.

En el artículo 308 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), se define como área de manejo especial “la que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables”.

De acuerdo con la FCDS “El Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) con 3.871.790 hectáreas fue creada mediante el Decreto Ley 1989 de septiembre 1 de 1989, para garantizar la permanencia de la riqueza natural de un territorio conformado por cuatro Parques Naturales Nacionales (La Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua), tres Distritos de Manejo Integrado (DMI), una serie de Reservas Forestales Protectoras, Resguardos Indígenas y Zonas de Reserva Campesina (ZRC), entre otras figuras”².

¹ Recuperado de: <https://fcds.org.co/linea-amem>

² Recuperado de: <https://fcds.org.co/linea-amem>

Los cuatro (4) Parques Nacionales Naturales (PNN) que comprende, contienen la siguiente superficie: PNN Sierra de la Macarena (605.901,76 ha); PNN Tinigua (215.107,15 ha); PNN Cordillera de Los Picachos (288.266,15 ha); PNN Sumapaz (219.611,19 ha). En cuanto a los tres (3) Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI): DMI Ariari - Guayabero (2'359.785,11 ha); DMI Macarena Norte (359.999,4 ha); DMI Macarena Sur (38.288,8 has).

El territorio del AMEM, además de la enorme biodiversidad de la zona y de prestar la función conectora entre los ecosistemas andino, orinocense y amazónico, a escala continental, esta zona se considera clave para la conservación del funcionamiento de la gran cuenca amazónica (FCDS).

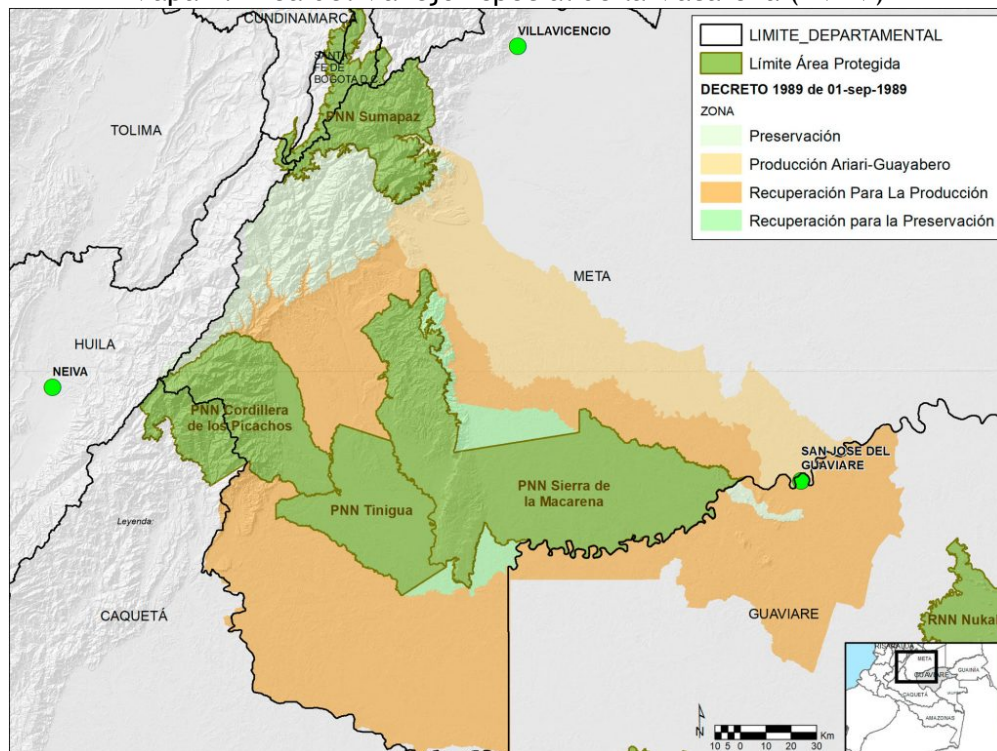
Es precisamente la anterior condición de conexión geográfica entre los ecosistemas andino, orinocense y amazónico, la que permite establecer un corredor de movilidad desde la zona andina del Sumapaz, atravesando el piedemonte de la vertiente oriental de la cordillera en el Meta y Caquetá, luego se conecta con la Sierra de La Macarena, los PNN de Los Picachos, Tinigua y La Macarena y desde estos, a través de las cuencas de los ríos Duda, Güéjar, Losada y Guayabero llegar hasta las selvas del Guaviare, Caquetá y Vaupés.

También en sentido nororiental, se puede salir a la llanura irrigada por el río Ariari y desde allí al resto de sabanas que comprende la Orinoquía colombiana. Este mismo corredor también funciona en sentido contrario, es decir, oriente a occidente, conectando la selva amazónica y llanuras del piedemonte con el altiplano andino de Cundinamarca, Huila y Tolima (ver mapa 2).

En este contexto geográfico y ecosistémico, desempeña un papel fundamental el cañón del río Duda, sumado a las cuencas de los ríos Guayabero y Ariari, que se han desempeñado como corredor de colonización de comunidades campesinas provenientes del Sumapaz desde la década del 50, siendo los corredores donde se surtió la colonización y la conformación de columnas de marcha desde Villarrica (Tolima) y la región del Sumapaz (Cundinamarca). Asimismo, la conexión incluso a Icononzo (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca) con Uribe (Meta). Dichos flujos de colonización se dieron en respuesta a la ofensiva militar del Gobierno de ese entonces.

Fue en estos territorios donde se instalaron los primeros campamentos de los migrantes campesinos y desde donde se registran los orígenes de las FARC-EP hacia el año 1964 y su posterior expansión. Años después, como punto estratégico se convirtió en el área hegemónica de dicha agrupación subversiva en las décadas del 70, 80 y 90 a partir de la cual fue dominada por el Bloque Oriental de las FARC-EP. Allí también se estableció su Secretariado.

Mapa 2. Área del Manejo Especial de la Macarena (AMEM)




Fuente: fcds.org.co

En las estribaciones del río Duda (jurisdicción de Uribe y Mesetas), las FARC realizaron varias de las Conferencias que definieron sus estrategias y metas insurgentes. “Entre 1966 y 1978, se produjeron cinco conferencias de este grupo guerrillero, entre los ríos Duda y Guayabero, en la región del Ariari, así como en la región del Pato, en la confluencia entre Meta, Huila y Caquetá”³.

Fue precisamente en la Séptima Conferencia de mayo de 1982, realizada en Guayabero (Meta), bajo el mando guerrillero de Jacobo Arenas, que se plantearon las nuevas directrices estratégicas en las que se reafirmó el principio de «combinación de todas las formas de lucha» (política y militar) y se estableció la que denominaron Ley 001 de Reforma Agraria Revolucionaria. Además, la creación de una cadena de frentes a lo largo de la cordillera Oriental que partían desde el municipio de Uribe y llegaban hasta Arauca en la frontera con Venezuela. Con todo ello, se fijaban como objetivo fundamental la toma del poder a partir de la lucha armada, a través del despliegue táctico sobre la Cordillera Oriental, siendo Bogotá D.C. su meta final.

Los municipios de Uribe y Mesetas cuentan con tres ríos que son tributarios de importantes subcuencas del departamento del Meta, entre los cuales podemos señalar: la subcuenta del río Duda-Guayabero con una superficie de 4.157,7 Km² que baña parte

³ Observatorio de la Consejería Presidencial para los DDHH. 2015, pág. 564.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 18 de 75

del municipio de Uribe. Sobre el sector alto se localiza la subcuenca del río Guayabero con un área de 5.918,1 Km², que comparten los municipios de Uribe y La Macarena. Para los municipios objeto de advertencia, los ríos que tienen una mayor importancia son: El Güéjar (que conecta a Mesetas, con Vista Hermosa y Puerto Rico), el Duda y el Guayabero; estos dos últimos conforman la cuenca hídrica del Guayabero y bañan a Uribe.


Esta riqueza hídrica también fue aprovechada por las extintas FARC EP para la estructuración y trazado de sus corredores estratégicos. Es necesario señalar que el río Duda junto con el río Lozada, son afluentes importantes del río Guayabero, el cual bordea el sector sur de la Serranía de La Macarena, en dirección Sur a Norte, confluyendo más adelante con el río Ariari (límites Guaviare - Meta) para conformar el río Guaviare, el cual continúa su recorrido hacia el oriente, hasta su desembocadura en la cuenca del Orinoco en la frontera con Venezuela (límites entre Vichada y Guainía).

La trayectoria fluvial de dichos ríos, ayudaron en su momento a las FARC EP a consolidar el corredor desde el Sumapaz hacia el sur, buscando al Caquetá y Guaviare; y luego al oriente buscando al Vichada y Venezuela. Precisamente, son estos mismos corredores los que están siendo retomados por las Facciones Disidentes de las ex FARC para el despliegue de sus frentes armados buscando reinstalar los dispositivos y rutas de movilidad que mantuvo las FARC EP durante su existencia. También, para el manejo de economías ilícitas y rutas de narcotráfico.

Los municipios de Uribe y Mesetas comparten en su costado occidental las estribaciones de la vertiente Este de la Cordillera Oriental. Por tanto, su morfología física comprende zonas montañosas, de piedemonte y llanuras hacia el Oriente que confluyen sobre la cuenca del río Duda, el cual define sus límites municipales. Las dos cabeceras municipales se ubican en la zona del Piedemonte.

En el municipio de Uribe las llanuras se ubican entre la Sierra de La Chamuza y el río Duda; de allí que tenga casi todos los pisos térmicos. En el aspecto ambiental cuenta con grandes áreas naturales en los Parques Nacionales Los Picachos, Tinigua y Sumapaz. El municipio de Mesetas tiene una parte plana en el centro del municipio, sector de piedemonte, y hace parte del valle del río Duda (toda colindante con Uribe). La parte montañosa de Mesetas se encuentra tanto al noroeste, que corresponde a la cordillera Oriental, como al oriente que incluye las estribaciones de la Serranía de La Macarena. Se destacan los cerros Ramírez, Purgatorio, Triunfo, Buenavista y Peralta.

La morfología de Mesetas y Uribe tiene un alto potencial para la agricultura y para la ubicación de colonias humanas (abastecimiento de aguas y productos de pan coger); además, el conocimiento geográfico que los grupos armados ilegales tienen de ella, facilita el desarrollo de la guerra irregular y el uso como retaguardia estratégica. Son precisamente estas condiciones las que permitieron subsistir a las autodefensas campesinas de los años 40 y 50 del siglo XX, posteriormente a las FARC EP y hoy día al frente 40 de las Facciones Disidencias de las FARC que quiere imponerse en él.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 19 de 75

1.2 POBLACIÓN, ACTIVIDADES PRINCIPALES Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Como ya se ha descrito sobre las características orográficas del territorio, la población que habita en la jurisdicción de Uribe y Mesetas se asienta sobre terrenos que presentan diversidad topográfica y climática, por la existencia de zonas montañosas, zonas de reserva compuesta de bosque tropical húmedo que corresponden a PNN y zonas de sabanas en la parte baja.

En los municipios de Uribe y Mesetas, la mayoría de personas habitan en las zonas rurales. En el municipio de Uribe, el 77,2% de la población habita en la zona rural y el 22,8% en la zona urbana. Mientras que, en el municipio de Mesetas, el 58.1% habita en la zona rural y el 41.9% en la zona urbana. Las características sociales y étnicas de la población, se distribuye entre campesinos, indígenas y en menor proporción afro descendientes.

La actividad económica principal de estos dos municipios, se desarrolla principalmente en las zonas rurales, siendo la principal actividad productiva la ganadería de doble propósito (mayor producción lechera en Uribe). La actividad agrícola es similar en ambos municipios, con cultivos transitorios como el maíz y el frijol y cultivos permanentes como el aguacate, plátano, yuca, cítricos, papaya, piña y otros como el café.

La colonización y asentamiento de comunidades campesinas en estos territorios, como ya se ha dicho, datan de la década de los años 50 del siglo XX, es decir, hace más de 60 años. La declaratoria del AMEM, como Área de Manejo Especial fue en 1989, es decir, algo más de 30 años después. Este es un aspecto muy importante para considerar en la comprensión de los conflictos socioambientales y de tierras que perviven en gran parte del suroriente del Meta y de la región de la Macarena - Guayaquero.

Es por ello que, históricamente, el territorio del “AMEM ha sido escenario de conflictos desde los inicios de la guerra civil colombiana, siendo una de las regiones de más difícil gobernabilidad y una de las más vulnerables a afectaciones ambientales, por lo que la defensa del medio ambiente ha sido impulsada por diferentes personas y colectividades. En ella han participado pueblos y comunidades indígenas, campesinos y sus organizaciones, sociedad civil, ONGs, funcionarios del nivel central, regional y local, e incluso miembros de grupos armados como la guerrilla de las FARC y las Fuerzas Militares” (FCDS).

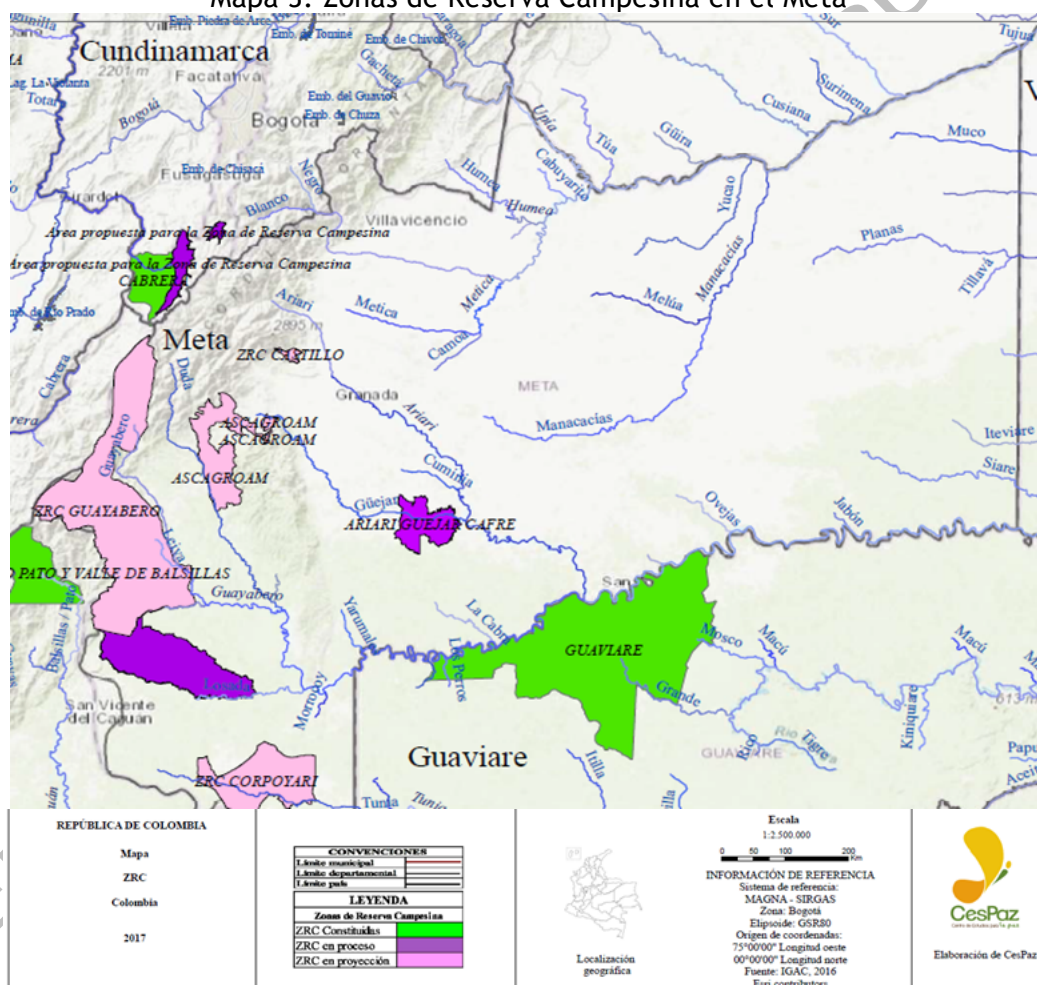
A pesar de su existencia, las conflictividades entre comunidades campesinas y las entidades del Estado, parecen haber tomado mayor visibilización a partir de la implementación de los acuerdos de paz (2016). Una posible explicación puede encontrarse en el dominio hegemónico que las FARC EP tuvieron en el territorio, lo cual hacía infranqueable el acceso de entidades y programas estatales en dichas zonas, incluso el control de las actuaciones de los funcionarios de PNN en aquel entonces. Recientemente, desde hace unos tres años, el Estado colombiano a través de Parques Nacionales Naturales, y con el apoyo en la región de la Corporación Autónoma Regional

CORMACARENA, ha intentado hacer cumplir las regulaciones y controles ambientales establecidos en la normatividad vigente.

1.2.1 Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)


Una de las figuras asociativas y jurídica que han utilizado los colonizadores de estos territorios, ha sido la figura de “Zonas de Reserva Campesina”, definidas en la Ley 160 de 1994. Según el Artículo 80 de dicha ley, estas son áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad, para la estabilización y consolidación de la economía campesina.

Mapa 3. Zonas de Reserva Campesina en el Meta



Fuente: Centro de Estudios para la Paz.

La definición de ZRC aparece un poco más clara en el acuerdo 024 de 1996 cuando señala que es un mecanismo encaminado a eliminar y prevenir la inequitativa

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 21 de 75

concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico, y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos.

En los municipios objeto de esta Alerta, encontramos Zonas de Reserva Campesina en Proyección y en Proceso de constitución formal. En proyección se identifican las ZRC ASCAGROAM en Mesetas y ZRC Guayabero en Uribe. En Proceso de creación se encuentra un área ubicada hacia la parte Sur de Uribe, riberas del río Losada, al parecer una potencial ZRC aun sin denominación específica, que colinda con la ZRC Guayabero (ver Mapa 3).

Las ubicaciones geográficas de los territorios de las mencionadas ZRC corresponden a las zonas de amortiguación del área del Sistema de los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Los Picachos y Serranía de La Macarena.

La existencia de complejos problemas estructurales entre los campesinos colonizadores y las entidades estatales, ha configurado conflictos socioambientales sin resolver, que en la actual coyuntura se han complejizado aún más por el interés de otros actores sociales y de proyectos económicos, como son latifundistas, ganaderos, narcotraficantes, los empresarios mineros y de construcción de megaproyectos viales.


Tales conflictos sin resolver, sumada a la variopinta existencia de intereses y actores, configuran vulnerabilidades que también buscan aprovechar las Facciones Disidentes de la ex FARC frente 40 o Tercero en su interés de reinstalar el orden guerrillero que en otrora impusieron las FARC EP. De lograrlo, sus acciones violentas exponen a la población campesina a sufrir restricciones al ejercicio de sus derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales, e interferencia en las demandas por definir derechos de propiedad sobre la tierra y demás procesos sociales, ambientales, políticos y económicos.

Para ello, las áreas protegidas y cuencas hídricas les sirven como zonas de ocultamiento, avituallamiento, corredores de narcotráfico y retaguardia estratégica. Mantienen el control de las zonas de bosques primarios a través de la regulación de la tala de bosques, permitiendo abrir chagras para los cultivos de Coca. El AMEM les propicia el establecimiento de los corredores estratégicos que en su momento requirieron las FARC EP para desarrollar la guerra contra el Estado colombiano.

2. CONTEXTOS DE LA AMENAZA

2.1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

El territorio de los municipios Uribe y Mesetas ha representado un emblemático simbolismo en el marco de la guerra entre las FFMM del Estado colombiano contra las extintas FARC EP. Dado que las FARC EP lograron llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional en 2016, su salida como grupo insurgente no ha significado la desaparición del riesgo para la población civil de Uribe y Mesetas, y en la actual

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 22 de 75

coyuntura, por el contrario, se ha reconfigurado la violencia de los cruentos pasados años de guerra con el extinto grupo insurgente.

Por tanto, resulta pertinente considerar como antecedentes del actual ciclo de violencia creciente, la dinámica de lo que fue la confrontación entre FFMM del Estado y las FARC EP con el fin de evidenciar interrupciones, similitudes y/o continuidades en algunos aspectos estructurales del territorio, que las actuales Facciones Disidentes de las ex FARC, ahora enarbolan como continuación de la lucha guerrillera y en las que el territorio también representa las mismas banderas fundacionales.


En la región que integra los municipios Uribe y Mesetas, la guerrilla de las FARC registró su mito fundacional campesino y revolucionario. En este territorio se consolidó la presencia del Secretariado y del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO), desde el cual se dictaban órdenes y declaraciones para la mayoría de los frentes de la Orinoquia e incluso del resto del País.

El significado del territorio de estos municipios también ha marcado la pauta para el direccionamiento de la lucha contrainsurgente de las FFMM de Colombia, en particular el Ejército Nacional, cuyos procesos de modernización y de reingeniería militar ha demandado cambios tanto en lo doctrinal como en el derecho operacional. En esta zona se han desarrollado icónicas incursiones militares. La primera denominada operación Colombia (más conocida como “Casa Verde”) a finales de 1990, con el propósito de dismantelar el Estado Mayor y el Secretariado de las FARC EP. Posteriormente, le siguieron una serie de operaciones y planes de guerra, en el marco de lo que se conoció como Plan Colombia, los cuales tuvieron a Uribe y Mesetas entre sus zonas de intervención.

En el territorio también se han gestado importantes espacios de negociación de acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. Se destaca el penúltimo intento a finales de la década de los 90s’, del gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, cuando se declaró la “Zona de Distensión”, en la cual se despejaron cuatro (4) municipios del Meta, entre ellos Uribe y Mesetas, y uno del Caquetá. El proceso de negociación finalizó en el año 2002, sin acuerdos en favor de la paz.

Desde entonces, los gobiernos siguientes comienzan la implementación de los más ambiciosos y estratégicos planes de guerra: Plan Colombia (1998-2004), Plan Patriota (2004-2006), Plan Consolidación, Plan Bicentenario, Plan de Guerra Espada de Honor en sus etapas IV y V y Plan Victoria. Todos tenían entre sus objetivos principales capturar a los jefes del EMBO (Estado Mayor del Bloque Oriental), debilitar las fuentes de financiación de las FARC-EP, atacar sus zonas de retaguardia y desarticular sus frentes de guerra.

El Plan Colombia inició como un programa para afectar los cultivos de coca en el país, pero pronto se enfocó en operaciones contrainsurgentes. Fue continuado por el Plan Patriota, bajo el marco de la política de Seguridad Democrática. El Plan Patriota, también conocido como campaña militar J.M., en su primera fase abarcaba más de

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 23 de 75

300.000 Km² y durante la misma se organizó la Fuerza de Tarea Omega (2003 - 2004). La segunda etapa (2004), tenía como objetivos principales, la persecución de los jefes guerrilleros en un área geográfica de 160.600 Km² de selva.


La operación de estos diferentes Planes de guerra conllevó la creación de Comandos Conjuntos (Fuerza de Tarea Omega) y de comandos especiales denominados Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA). Para esta operación, se involucraron tropas de Brigada Móvil 1 (La Macarena), Brigada Móvil 2 (Uribe), Brigada Móvil 3 (La Macarena) y Brigada Móvil 10 (La Julia), entre otras Brigadas del Caquetá, Meta y Guaviare.

Para finales del 2003, las FARC llevaban a cabo su estrategia “*La Otra Colombia es Posible*”, a través de la cual imponía su propio sistema de gobierno en los territorios del Meta, Caquetá y Guaviare. Uribe y Mesetas, por tanto, se encontraban bajo la misma égida del control de este grupo guerrillero. En esta estrategia, la subregión Guayabero les servía como retaguardia estratégica. Durante los meses siguientes, las FARC EP consideraban que el Plan Patriota era un fracaso, lo cual les sirvió para moldear su respuesta a la ofensiva del Estado, bautizándola como “Plan Resistencia”.

Con la implementación del Plan Colombia, inició el proceso de modernización de las FFMM, se definió una estrategia integral a través de la cual se recibió material y equipo norteamericano y a su vez se adoptaron avances doctrinales en lo que respecta a fuerzas especiales, aviación e inteligencia, los cuales se potenciaron con las políticas de la seguridad democrática del entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Las operaciones “Aniquilador” I y II y “Libertad I” del Plan Patriota, dentro del Plan Colombia, le permitieron al Ejército Nacional desplazar a las FARC-EP de los alrededores de Bogotá y obligarlos al repliegue de sus fuerzas hacia la zona de Uribe, Mesetas y Guayabero.

Para el año 2008, después de seis años de ofensiva permanente, las FARC fueron duramente golpeadas por el Ejército Nacional. La ofensiva militar desde 2002 sobre esa guerrilla, la obligó a replegarse hacia los sectores más selváticos y pasar a la defensiva, poniendo el énfasis en el intercambio de rehenes. Les sobrevino también la muerte de algunos miembros de su Secretariado y el Gobierno logró ejecutar con éxito la Operación “Jaque”.

A partir del año 2009, los golpes militares de la Fuerza Pública perpetrados a las FARC, obliga a esta guerrilla a realizar cambios en su estrategia, pasando de concentrar grupos numerosos de combatientes a realizar acciones en pequeños grupos de forma aislada y continua, en lo que se conoció como el Plan Renacer de las FARC. Pese a los golpes dados por las Fuerzas Militares del Estado colombiano, la estructura militar de las FARC-EP aún se encontraba muy fortalecida. Para el año 2011, por ejemplo, mantenían su presencia con los Frentes 52, 31, 40, 43 27, 7, 22 26, 54, 26, 53 y 31 en los municipios de Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico, Fuente de Oro, Granada, El Castillo y Cumaral. Esta estructura militar y presencia territorial sufrió pocas variaciones hasta el momento en que terminaron los Diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el año 2016.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 24 de 75

Sin embargo, en 2011 con la muerte del máximo comandante militar de las FARC EP en inmediaciones de la Sierra de La Macarena, en el sitio conocido como La Escalera, cercano a la Inspección de La Julia del municipio de Uribe, alias el “Mono Jojoy”, también le significó un duro golpe a la moral militar de la cual no se recuperaron hasta la firma de los Acuerdos de paz a finales de 2016.


En cuanto a la organización de las Fuerzas Militares, los resultados del proceso de modernización y avance de los planes estratégicos de guerra, les permitió pasar de los Comandos Conjuntos a organizaciones provisionales denominadas Fuerzas de Tarea Conjuntas, como parte de la nueva estrategia de “lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y los grupos armados ilegales”, convirtiéndose en la columna vertebral del Plan Espada de Honor (plan de guerra del año 2011). La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que abarcaba gran parte de la región del Duda - Guayabero, significaba para las FFMM atacar desde la retaguardia estratégica a la guerrilla de las FARC EP, considerada la “amenaza más peligroso que tenía la Nación” (CGFFMM).

A partir del segundo semestre del año 2015 se puso en ejecución el proyecto Damasco 1.0, que en su primera fase de desarrollo inicia la transformación de la doctrina militar del Ejército Nacional, de inspiración norteamericana y chilena, la cual se constituye desde entonces en el eje articulador del plan de transformación institucional del Ejército Nacional. En el marco de la doctrina Damasco se incorporan los postulados operacionales de Batallas Aeroterrestres, Operaciones de Dimensión Total, Operaciones del Espectro Total y Operaciones Terrestres Unificadas, que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN.

En el marco del concepto operacional único, se adopta el concepto denominado Operaciones Terrestres Unificadas (OTU), las cuales son ejecutadas a través de lo que se denomina elementos de la Acción Decisiva: Maniobra de Armas Combinadas (MAC), Seguridad de Área Extensa (SAE) y Operaciones Especiales (OE). Estos principios doctrinales, bajo la dirección de un comandante que se enmarca en lo que llaman Mando Tipo Misión (MTM), una nueva función de conducción de la guerra.

Resultado de esta transformación doctrinal y operacional, se fortalece aún más la figura de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FTCO), bautizada con la “representación del fin” (derrota militar de las FARC). Con la entrega de armas de las FARC EP en el marco de la negociación de paz con el Gobierno Nacional (Acuerdo para la terminación del conflicto, etc.), esta capacidad adquirida para combatirlos, se trasladaron para hacer frente a la nueva amenaza que se configura en la región suroriental del país: las Facciones Disidentes de las extintas FARC.

Según el CGFFMM, “La Fuerza de Tarea Conjunta Omega conduce operaciones militares conjuntas, coordinadas, internacionales y multilaterales, en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare (13 municipios asignados) orientadas (...) para neutralizar los Grupos Armados Organizados residuales (GAO-r), Grupos Delictivos Organizados (GDO), Delitos Transnacionales (DT) y fenómenos de criminalidad que afectan a la población civil”.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 25 de 75

La FTCO tiene varios componentes de las diferentes fuerzas militares del Estado colombiano y las cuales realizan operaciones en jurisdicción de Uribe y Mesetas. El componente terrestre del Ejército Nacional se conforma por 6.231 hombres, distribuidos en tres unidades Operativas Menores y 15 unidades tácticas, distribuido equitativamente en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. El componente fluvial de la FTCO incluye 853 hombres, distribuidos en dos unidades tácticas de Infantería de Marina de la Armada Nacional, que despliegan sus operaciones de garantía al tránsito fluvial y la libre navegabilidad por los ríos Duda, Güéjar, Lozada, Guayabero, Ariari, Guaviare, Pato, entre otros del Meta, Caquetá, Guaviare y Vaupés. El componente aéreo de la FTCO, corresponde a 33 aeronaves de la FAC, que cumplen misiones de ataque aéreo, reconocimiento armado, evacuación Aeromédica, vigilancia aérea, entre otras⁴.

Con la defección de varios frentes de las FARC EP después de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, entre ellos los frentes 1, 7 y 40 que operaban en la región del Meta y Guaviare, el Cañón del Duda sigue siendo un objetivo geográfico de alto interés para las nuevas Facciones Disidentes de las FARC, en particular el frente 40, también autonominado frente Tercero, el cual ha intensificado sus acciones en la jurisdicción territorial de los municipios de Uribe y Mesetas.


Esta zona en su momento estuvo bajo el mando de Henry Castellanos Garzón, Alias Romaña, quien en ejercicio de su poder en el Bloque Oriental de las FARC EP, al parecer se apropió de un gran número de predios en la zona, los cuales en la actual coyuntura amenaza con retomar. Este sujeto que decidió apartarse de los acuerdos de Paz está prófugo de la justicia y expulsado de la JEP, junto con alias Iván Márquez y alias El Zarco Aldinever, quienes decidieron optar por el rearme. Es de señalar que alias Romaña ha amenazado a los pobladores de las zonas rurales de las veredas ubicada de Norte a Sur entre los ríos Guayabero y Duda, de que recuperará los que él llama “sus predios”. Esta situación ha resucitado la zozobra y el temor de la población de campesinos de dichas veredas.

2.2. DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO

La actual coyuntura que transcurre en gran parte de los municipios de Uribe y Mesetas, corresponde a la expansión, concreción y consolidación de los escenarios de riesgo advertidos en los siguientes Informes de Riesgo y Alertas Tempranas que el SAT ha identificado:

- **Informes de Riesgo:** Informe de Riesgo de Inminencia 001 A.I. del 18 de enero de 2017 para los municipios San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá; el IR N° 013-17 del 31 de marzo de 2017 para el municipio La Macarena; el Informe de Riesgo No. 016-17 A.I. del 10 de abril de 2017 para los municipios Uribe, Mesetas, Lejanías y El Castillo; y la Nota de Seguimiento 014-17 al IR 13-17 para el municipio La Macarena emitida el 1 de diciembre de 2017. En estos Informes se advertía sobre la gestación y conformación de

⁴ Recuperado de <https://www.cgfm.mil.co/es/fuerza-de-tarea-conjunta-omega>

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 26 de 75

estructuras embrionarias en disidencia de las FARC que negociaron el Acuerdo de Paz en la región de Meta, Guaviare y Caquetá, aledaña y de injerencia de los municipios Uribe y Mesetas.

- **Alertas Tempranas:** AT 042-18 del 24 de abril de 2018 para el municipio La Macarena; la Alerta Temprana de Inminencia N° 047- 18 del 28 de mayo de 2018 para el municipio de Uribe (Meta); la Alerta Temprana de Inminencia N°001-19 del 04 de enero de 2019 para San Vicente del Caguán (Caquetá) y el área compartida con Macarena (Meta). En estas Alertas se evidencia la consolidación de las Facciones Disidentes de las extintas FARC en los municipios vecinos y su avance hacia la jurisdicción de Uribe y Mesetas.

Las Facciones Disidentes de las ex FARC a través de los frentes 1, 7 y 40 han venido avanzando desde las zonas rurales de los municipios de Vistahermosa, La Macarena y San Vicente del Caguán (Caquetá), en el suroriente de los límites con Uribe y Mesetas. Han tomado mayor forma como estructura armada al punto de reivindicarse el nombre de frente 40 o Tercero, a la usanza de los que fueron en su momento las FARC EP.

También se identifica el creciente interés de grupos armados vinculados a los Grupos Sucesores del Paramilitarismo, que en el territorio se identifican como AGC y Bloque Meta, los cuales tienen presencia en los municipios vecinos del norte, como son Vistahermosa, San Juan de Arama, Lejanías, San Martín y Granada. Estos grupos realizan incursiones esporádicas en las veredas limítrofes con Lejanías y San Juan de Arama, de la zona nororiental de Mesetas.

A continuación, se describe el desarrollo y dinámica de dichos actores armados no estatales parte del conflicto que en su accionar violento afectan derechos humanos de la población civil campesina de estos dos municipios objeto de advertencia.

2.2.1. Facciones Disidentes de las ex FARC

Con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016) y la dejación de armas (2017), se tuvo como propósito que el componente militar de las FARC EP dejara de existir. Sin embargo, en julio de 2016, antes de la firma de Acuerdo Final el Frente Primero expresó su separación del proceso de paz al informar a las Mesa de Conversaciones que no haría parte del desarme, oficializando así su disidencia de la estructura guerrillera. Meses después, la Defensoría del Pueblo por medio del Informe de Riesgo No. 016-17 de inminencia del 10 de abril de 2017, advirtió sobre la configuración y consolidación de estructuras embrionarias de las FARC en disidencia en jurisdicción de los municipios Uribe, Mesetas, Lejanías y El Castillo (Meta).

Hoy en día ya se muestran consolidadas como un actor armado no estatal parte del conflicto armado, bajo el mando de Miguel Botache Santillana, más conocido como “Gentil Duarte”, a quien se puede catalogar como el comandante en jefe de dichas estructuras que se autonominan como la continuación de las FARC EP, pretendiendo ocupar y controlar el territorio de las jurisdicciones municipales de Uribe y Mesetas.


Para efectos de diferenciar de lo que fue las FARC EP en su momento (2016) y de los grupos armados organizados de ahora, nos referiremos a estos últimos como Facciones Disidentes de las ex FARC.

Como se ha descrito hasta ahora, lo advertido por el SAT desde 2016 y 2017, evidencia que desde dichos años se vienen configurando las acciones para la articulación de los diferentes reductos disidentes de las FARC sobre las márgenes de los ríos Guaviare, Guayabero, Ariari y Duda. Este espacio geográfico, como ya se mencionó, fue utilizado históricamente como retaguardia estratégica del accionar militar del Bloque Oriental de las otrora FARC EP y que hoy en día pretende ser recuperado por las Facciones Disidentes de las FARC.

Para las Facciones Disidentes de las FARC, las decisiones que en otrora adoptaron las extintas FARC EP en las llamadas Conferencias, particularmente la Novena Conferencia de 2007 (no reconocen la Décima Conferencia de 2016), también son la inspiración de hoy en día para fundamentar sus estrategias de continuar la guerra y reposicionamiento en las zonas que dominó el otrora Bloque Oriental de las FARC EP. Representa un interés simbólico y estratégico, más que un objetivo militar, poder hacerse al control de dichos territorios que al parecer consideran son sus orígenes fundacionales. Adicionalmente, porque estos territorios ya fueron transitados por muchos de sus actuales combatientes, los cuales en la actual coyuntura resultan necesarios para el desarrollo de actividades criminales.

En particular las Facciones Disidentes de las ex FARC a través de los frentes 1º, 7º y 40 (Tercero), tienen interés en las zonas ambientalmente protegidas para utilizarlas como lugares de ocultamiento, establecimiento de campamentos móviles y permanentes, zona de reagrupamiento y retaguardia estratégica, así como de avituallamiento; intereses que en su momento tuvo el ya mencionado Bloque Oriental de las FARC EP. También para desarrollar actividades de economía ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

La Defensoría del Pueblo ha podido establecer que las Facciones Disidentes de las ex FARC a través de los frentes 1º, 7º y 40 (Tercero), están buscando consolidarse ampliamente en toda la región bajo el autodenominado rotulo de “Bloque Jorge Briceño”. El frente 40 (o Tercero) es el que tiene presencia en las jurisdicciones de Uribe y Mesetas; al parecer estaría operando desde el río Guayabero, en la parte plana que circunda el río Duda (Uribe y Mesetas) y hasta el área de sabana del piedemonte. En ese sentido, han venido aproximándose y cercando a las poblaciones rurales de La Julia y sus veredas aledañas (Uribe) y Puerto Nariño y sus veredas vecinas en el municipio de Mesetas; su presencia ha dejado ya varias víctimas fatales y lesionadas en estas zonas veredales.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 28 de 75




Fuente: Defensoría del Pueblo (monitoreo panfletos amenazantes y denuncias) 2020

Esquema 1. Ciclo de control territorial de las Facciones Disidentes de las ex FARC en los municipios Uribe y Mesetas

La estrategia del frente 40 (Tercero) de las Facciones Disidentes de las ex FARC, es la de reasumir la dominación territorial de estos municipios. Para llevarlo a cabo, aprovechan las debilidades y vulnerabilidades que presenta la población civil y la presencia diferenciada de las entidades del Estado, imponiendo medidas amenazantes contra la población civil, buscando regular sus actividades cotidianas, la libre movilidad, fijar las reglas para el acceso de la tenencia y uso de la tierra en áreas y zonas protegidas, determinar las condiciones y requerimientos de colonización en ciertas áreas, limitar la cantidad de tierra que se puede talar (deforestar) y el porcentaje del suelo que puede ser dedicado al cultivo de la coca (ver esquema 1).

El frente 40 (Tercero) promueve la utilización de la selva desmontando mayores áreas para la siembra de coca y la instalación de procesaderos para obtener derivados cocaineros (las llamadas cocinas o cristalizaderos). Al exacerbar la producción de coca, estos grupos también posibilitan la obtención de rentas producto del gramaje en la comercialización entre cultivadores y narcotraficantes. De ahí su resistencia a abandonar las áreas de bosque primarios de los mencionados PNN y que hacen parte del AMEM como ya se ilustró precedentemente.

Los obstáculos en la implementación del PNIS, la lentitud en la ejecución de los proyectos que contempla el Programa y la incertidumbre en su implementación en la actual coyuntura y el malestar general que se ha exacerbado entre los cultivadores de

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 29 de 75

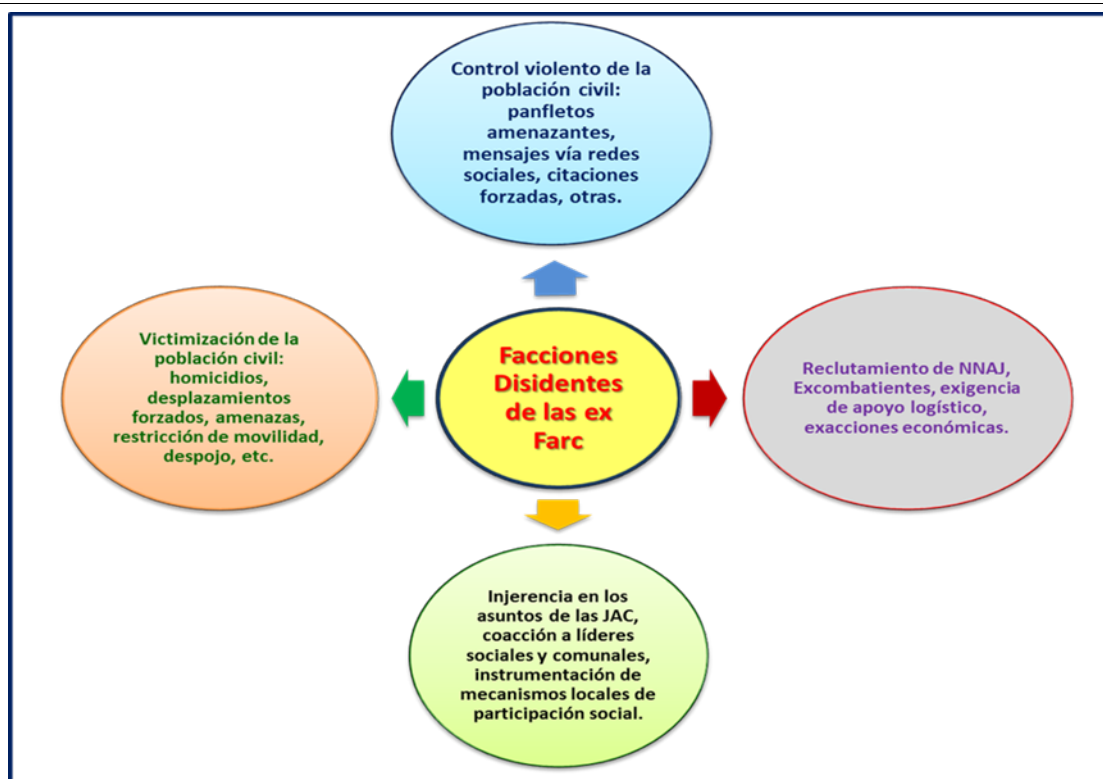
coca y demás campesinos firmantes de los acuerdos de erradicación voluntaria, es una ventana de oportunidad que el grupo armado ilegal ha venido catalizando en su favor como organización armada emergente y en proceso de consolidación. Incluso, de ser necesario, también constriñen a la población civil para que se oponga a los avances en la implementación de programas como el PNIS y/o PDET convirtiendo al campesinado en víctimas, no solo de amenazas sino también de homicidios selectivos para quienes se nieguen a participar.

Para las comunidades campesinas que habitan en las inmediaciones de los PNN, cuya ocupación ha sido histórica y generacional, con hábitos de vida, cultura, medios y modos de producción relacionados con el cultivo de coca, la creciente presencia y coexistencia con el grupo armado ilegal, que regula y controla sus actividades cotidianas, representa una exposición constante de riesgo para sus derechos fundamentales (ver esquema 2).

La injerencia de las Facciones Disidentes en la vida social de la población, tiene graves consecuencias para el ejercicio ciudadano, el ejercicio de liderazgo social y comunitario, la participación democrática, el acceso a los mecanismos de justicia comunitaria y a la libre movilidad en el territorio. Un aspecto de profunda preocupación es la intervención en el trámite de los conflictos de la población, aspecto éste que tiene amplios márgenes de actuación dados los precarios derechos de propiedad sobre la tierra que aún persiste en el territorio y la alta conflictividad socio ambiental entre campesinos y agencias del Estado. Todo ello redunda en aplicación de mecanismos violentos para quienes infrinjan el “orden social” impuesto, que se expresa en amenazas, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, asesinatos y atentados contra la integridad personal.

El principal argumento que utilizan para legitimar sus acciones violentas y abrogarse la supuesta autoridad para determinar la suerte o las resultas de las querellas interpuestas, es la ausencia de las instituciones de justicia del Estado de derecho en este vasto territorio rural con precarias vías de comunicación. Para los pobladores rurales, la razón de los funcionarios para no acudir hasta las zonas rurales apartadas, es el argumento de la falta de garantías de seguridad para garantizar el acceso a la justicia, como en efecto ocurre.

ELABORADO



Fuente: Defensoría del Pueblo (monitoreo panfletos amenazantes y denuncias) 2020

Esquema 2. Control social de la población que realizan las Facciones Disidentes de las ex FARC en los municipios de Uribe y Mesetas

Uno de los instrumentos que las Facciones Disidentes de las ex FARC utilizan para canalizar sus mecanismos violentos en la región, son los panfletos amenazantes. A través de ellos anuncian su presencia, emiten sus postulados políticos e ideológicos, transmiten las amenazas e imposición de normas y patrones de convivencia contra la población civil, restricciones de movilidad en el territorio y demás amenazas para declarar objetivos militares a quienes no acaten tales mecanismos violentos. Estos pasquines son puestos a circular a manera de Boletines, que incluso registran con números secuenciales según el orden de publicación, los cuales se distribuyen de manera física o a través de redes sociales de la región.

La circulación de panfletos en los diferentes municipios del Meta, entre ellos Vistahermosa, Macarena, Uribe y Mesetas, en nombre del frente que corresponda, hasta ahora evidencian lo anteriormente dicho. También regulan a través de ellos, la imposición de exacciones económicas como mecanismos para la obtención de rentas principales y secundarias. Entre las fuentes principales se destacan las actividades del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal; como fuentes secundarias, las 'contribuciones' producto de la compra y venta de ganado, compra y venta de inmuebles y comercialización de licores.

La reciente serie de medidas decretadas por el Gobierno Nacional en el contexto de la crisis de COVID19, ha provocado efectos sobre los derechos de las personas que viven en estos municipios bajo el control de facto de las Facciones Disidentes de las ex FARC. Lo que se ha podido observar, es que estos grupos armados están tomando medidas muy similares a las decretadas por el Estado, bajo sus mecanismos de control territorial: es decir, imponiéndole a la gente que se quede en casa, evitar el libre tránsito de campesinos, entrada y salida de personas al territorio, e incluso afectando lugares de trabajo. Lo anterior bajo las dinámicas descritas por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana Inminencia 018 de 2020.

Entre las situaciones que exacerbaban el riesgo coyuntural para la población, tuvo que ver el primer caso de contagio por COVID-19 reportado para Mesetas. Las Facciones Disidentes de las ex FARC aprovecharon esta situación de crisis sanitaria para legitimar su presencia como organización “protectora y garante de la seguridad sanitaria” de la población que habita en estos municipios, ante la supuesta incompetencia del Estado. Dicha acción se realizó primero a través de la distribución de un panfleto amenazante, el cual circuló en las jurisdicciones de Uribe y Mesetas desde el 28 de abril de 2020.

A través de este panfleto, el frente 40 (Tercero) impone toque de queda, restricción de la movilidad y restricción de ingreso de personas provenientes de otras áreas del país, so pena de ser declarado objetivo militar para quien incumpla con lo impuesto. Es un claro y efectivo aprovechamiento de la situación de pánico y temor que existe en la población civil por la llegada del coronavirus al municipio de Mesetas.

El panfleto anteriormente mencionado, difiere con otro que circuló en el área de influencia de la Serranía de La Macarena, referenciado como “Comunicado público”, fechado el 10 de abril de 2020, a nombre de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC EP, Unidad John Linares - Frente Comandante Jorge Briseño” (sic). La información registrada en dicho pasquín, es preocupante en el sentido de estar aludiendo a otro frente. De ser cierta esta información, se puede entender que la estructura militar de las Facciones Disidentes de al ex FARC, es mucho más compacta hacia el sur del departamento del Meta con lo cual se puede avizorar una mayor influencia en los municipios focalizados en esta Alerta, configurándose así una eventual articulación entre los diferentes frentes en la estructura de Bloque.

De otro lado, una particularidad de la gran mayoría de panfletos amenazantes que circulan en las zonas rurales, es el involucramiento que por medio de ellos se hace a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las diferentes veredas. En el contexto de estos municipios, donde ha primado la organización social campesina de manera autónoma y representativa de toda la comunidad, la figura que legitima tal organización, es la Junta de Acción Comunal (JAC). Incidir en los asuntos de las JAC, resulta estratégico para la instrumentalización política del control social del territorio. En este sentido, existe una especial situación de riesgo para los presidentes de las JAC, líderes/as sociales y defensoras/es de Derechos Humanos. Ellos son objeto de continua presión por parte de las Facciones Disidentes de las FARC.

Las Facciones Disidentes de las FARC pretenden que los dignatarios sean quienes reproduzcan sus mensajes de imposición de normas y patrones de conducta a la población civil; asimismo, que notifiquen los llamados que el grupo armado ilegal haga a determinadas personas para que acudan a sitios específicos, citaciones que no son claras en el fin que persiguen, razón por la cual, ante dicha incertidumbre y riesgo, muchas personas optan por no acudir. Los riesgos por tales incumplimientos, muchas veces se trasladan al líder comunal que fue utilizado como canal de transmisión.


Las anteriores circunstancias, ha motivado que muchos de los actuales presidentes de las JAC no deseen postular de nuevo su nombre para presidir las directivas comunales de sus veredas en las elecciones de dignatarios pendiente por realizarse éste año 2020. Peor aún, algunos están contemplando la posibilidad de abandonar dicho cargo incluso por la vía del desplazamiento de su entorno. Entre las razones de ausentarse del territorio rural, se encuentra su consideración de heredar amenazas ante los incumplimientos de las personas citadas por el grupo armado, los cuales optaron por hacer caso omiso de dichos llamados (por miedo a lo que les ocurra al acudir).

Lo anterior hace suponer a los dignatarios que en cualquier momento se empezarán a ver las represalias de parte de las Facciones Disidentes al considerar que ellos no les prestan la colaboración exigida. Lo anterior puede sugerir una crisis territorial de representación y de la libre expresión social de las organizaciones de la sociedad civil.

La circulación de panfletos también afecta a las mujeres trabajadoras sexuales, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, presuntos consumidores de alucinógenos y “pequeños delincuentes”, señalados como socialmente conflictivos, así como empresarios y comerciantes señalados como objetivos financieros. Muchos ya están siendo declarados como objetivos militares u otras consideradas como “no funcionales” para la operatividad del grupo armado en el territorio.

Las acciones de éste grupo armado ilegal, tienen como consecuencia la vulneración de derechos de la población civil, haciendo probable que se materialicen homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, afectaciones como consecuencia de las acciones bélicas (accidentes por minas antipersonal y/o armas trampa y MUSE -enfrentamientos con interposición de la población civil), utilización de métodos para generar terror e intimidación en la población civil (amenazas mediante panfletos, mensajes de texto y verbales), destrucción de bienes civiles, desplazamientos forzados y reclutamientos forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y utilización ilícita de menores en el conflicto armado interno.

Otro de los sectores poblacionales en grave situación de riesgo, es la población en proceso de reincorporación, a quienes al parecer prefieren ultimar a efectos de que no se conviertan en una interferencia en sus planes de reposicionamiento. El frente 40 (Tercero) busca primero que todo ampliar sus filas a partir del aumento de sus integrantes, vía reclutamiento. Aquellas personas que ya cuentan con experiencia en armas y con conocimiento de estrategias de combate, les simplificaría reducir tiempo

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 33 de 75

que deberían invertir en la fase de entrenamientos y la inversión en la disposición de logística para dicha fase inductiva.

Han iniciado por los excombatientes que encuentran asentados en las jurisdicciones de los municipios de Uribe y Mesetas, sobre todo de las Zonas Veredales. Por lo tanto, es lógico afirmar que han querido traer nuevamente a sus filas a los excombatientes en proceso de reincorporación y de reintegración.


Sin embargo, esta estrategia al parecer, con quienes no les funciona, conlleva la realización de homicidios selectivos. Lo anterior se puede explicar a partir de la consideración del actor armado de no concebir reposicionarse en el territorio, en antaño dominado por ellos mismos, y observar cómo excombatientes (a su vez ex camaradas) que se negaron a acompañarlos en la continuación de la guerra, ahora les corresponde interactuar con ellos a título de población civil.

La negativa de quienes deciden mantenerse en el marco de los Acuerdos, les puede significar correr el riesgo de deslegitimación y desautorización por lo que consideran falta de respeto de los que antes eran sus compañeros; quizás también temen que en algún momento ellos mismos se conviertan en un eventual riesgo para sus operaciones pues ya conocen, rutas, corredores y senderos estratégicos, así como lugares y puntos de avituallamiento y de ocultamiento, pretendiendo que dicha información siga siendo conocida sólo por ellos. Ya han sido asesinados algunos de los excombatientes de las FARC EP.

También se encuentran en riesgo diferentes tipos de organizaciones no gubernamentales y entidades del orden nacional e internacional que hacen presencia en el territorio y que impulsan proyectos y programas de protección ambiental y de alternativas productivas para remplazar los cultivos de coca. Para los intereses del frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC y los demás frentes 1 y 7 que operan marcadamente más al sur del departamento del Meta, pero que eventualmente inciden en jurisdicciones de Uribe y Mesetas, tales programas y proyectos son considerados en contravía de sus propósitos insurgentes.

Los programas pueden ser el PNIS, los PDET, así como todos aquellos que propendan por la implementación de los acuerdos de Paz. Como ya se indicó, las organizaciones internacionales OEA y USAID, así como operadores de sus proyectos, como son Misión Amazónica, Gilbert Austria, Instituto Amazónico de Investigación científica (SINCHI), la Corporación para el Desarrollo de la Amazonia (CDA), CORMACARENA, Parques Naturales Nacionales, entre otras, se pueden considerar en alto riesgo.

Las Facciones Disidentes de las FARC, también rechazan la presencia en el territorio de agencias internacionales, operadores y entidades nacionales y regionales que desarrollan programas y proyectos de desarrollo social, ambiental, productivo y cultural; en particular los relacionados con la implementación de los puntos del Acuerdo de paz. Asimismo, la resistencia a la ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Áreas Protegidas. Este grupo armado considera que los objetivos de cada uno de los programas

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 34 de 75

y proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, evitar la tala de selva y bosque y por tanto disminuir la siembra de cultivos de coca, son contrarios a sus propósitos estratégicos de garantizar fuentes de financiación provenientes del narcotráfico regional; por tanto, se oponen a su avance e implementación.


Asumen la participación de agencias internacionales en el territorio a través de la cooperación interagencial, como injerencia del "imperialismo norteamericano y sus aliados", el cual hace parte de su bandera de lucha ideológica que dicen enarbolar en su proyecto insurgente y de subversión al orden constitucional colombiano. En la medida en que evitan que tales proyectos se realicen en sus zonas de influencia, mayor será la incidencia en la dirección de las actividades productivas legales e ilegales que la población realice en el territorio; asimismo, fortalecer su injerencia en las posturas políticas contrarias que la población pueda asumir frente a la intervención del Estado.

También se encuentran en riesgo de afectación las personas que desarrollan actividades y programas misionales de las entidades descentralizadas y regionales del Estado en el territorio, cuyos fines son la protección, investigación y fomento de los recursos naturales y ambientales; en este sentido, los riesgos son muy altos para los funcionarios y servidores públicos responsables de implementar las misiones institucionales y demás actividades específicas en el territorio.

Las amenazas contra la población civil y las organizaciones que desarrollan actividades en la región, además de las restricciones para ocupar el territorio, explotar sus recursos naturales, desarrollar actividades productivas, comercializar los productos agropecuarios resultado de su explotación, como comercializar las mejoras obtenidas de los predios ocupados por los campesinos, entre otras intenciones, también pretende mostrar su capacidad de imposición para legitimar su ejercicio de control y poder territorial, tal como lo hicieron durante su existencia las extintas FARC EP antes de su entrega de armas. La escasa presencia de las entidades del Estado en este territorio, también contribuyen a que su injerencia sobre la población sea mayor.

Las consecuencias de tales amenazas recaen principalmente sobre las comunidades campesinas y demás población civil que residen en la zona, los cuales tienen que soportar las retaliaciones y materialización de dichas advertencias. Adicionalmente, las amenazas además de restringir el trabajo de los líderes sociales y comunales, los coarta hacia sus intereses insurgentes, incrementando desproporcionadamente los riesgos para dichas personas y sus liderazgos.

Hay que hacer mención especial de los abandonos forzados de tierras y los despojos que ocurrieron en el pasado, los cuales configuraron el territorio de tal manera que quizás hoy, ante la demora en la aplicación de la figura de Restitución de Tierras en las jurisdicciones de Uribe y Mesetas, este actor armado no estatal parte del conflicto pretende que dicha configuración siga igual, pues de esta manera aún tienen despejado el espacio sobre todo en zonas rurales para reposicionarse completamente en él.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 35 de 75

Los campesinos y campesinas pobres, desplazados y desplazadas, personas que promueven procesos de restitución y/o adjudicación de tierras, que no se sometan a las condiciones y pautas de comportamiento que imponga el frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC, se verán ante el riesgo de ser declarados objetivos militares de éstos.

2.2.2. Grupos Sucesores del Paramilitarismo: AGC y Bloque Meta


En los municipios de Uribe y Mesetas, la operatividad de los Grupos Sucesores del Paramilitarismo, conocidos como AGC y Bloque Meta (en adelante actores armados no estatales parte del conflicto Sucesores del Paramilitarismo), se reduce a incursiones inesperadas a los cascos urbanos y centros poblados, limítrofes con los municipios de San Juan de Arama, Vistahermosa y Lejanías. Por ejemplo, en Jardín de Peñas (Mesetas), sus apariciones y actuaciones han sido esporádicas en los últimos años, con poca notoriedad. Lo anterior, en tanto logran consolidarse, primero que todo, en las cabeceras municipales y centros poblados importantes.

Los actores armados no estatales parte del conflicto Sucesores del paramilitarismo también aprovechan para incursionar en los sectores donde las Facciones Disidentes de las FARC tienen menos o ninguna presencia, dado que éstas concentran su accionar en las zonas de reserva y de Parques Nacionales Naturales (PNN). Por tanto, prefieren los sectores aledaños a las cabeceras municipales y evitan territorios más apartados que les puedan significar confrontaciones armadas. Adicionalmente, dichas incursiones se les facilita, por ahora, por la débil presencia de milicias urbanas de las Facciones Disidentes de las FARC que realicen control contundente en los centros poblados.

El interés de los actores armados no estatales parte del conflicto Sucesores del paramilitarismo (A.G.C. y Bloque Meta), es el de expandirse desde los municipios del Ariari, donde ya están consolidados (fuente de Oro, San Juan de Arama, Granada y San Martín), hacia la subregión del Guayabero (Mesetas y Uribe). Lo anterior, de llevarse a cabo, generaría un gran riesgo para la población civil, pues eventualmente se pueden suscitar enfrentamientos con las Facciones Disidentes de las ex FARC.

Desde el año 2017, los actores armados no estatales parte del conflicto sucesores del Paramilitarismo han buscado penetrar las jurisdicciones de Uribe y Mesetas, valiéndose de coyunturas en las que se incrementan las acciones delictivas, para ofrecer presuntos servicios de seguridad a los ganaderos, comerciantes y hacendados. Una estrategia que urdieron durante ese año consistió en incursionar en la zona de Uribe e ir de finca en finca anunciando la constitución de un grupo de autodefensa, y también promoviendo la ocupación de predios baldíos por parte de personas a quienes ofrecieron protección. Se pudo conocer que ingresaron a territorios de Uribe en búsqueda de predios en las veredas La Belleza, La Estrella, Tierra Dentro y La Primavera.

La población civil pudo reconocer que una de las personas que encabezaba la iniciativa, había pertenecido a las FARC EP, y al parecer era quien los estaba guiando y orientando en el terreno. Posteriormente fue asesinado, presumiblemente a manos de Facciones

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 36 de 75

Disidentes de las FARC en zona rural de la vereda La Primavera a mediados de 2017. Como consecuencia de ello, y pese a que habían logrado ocupar algunos predios, abandonaron la estrategia de incursión y se retiraron. Por testimonios de los pobladores de las zonas rurales, como producto de los hechos descritos, se evidenciaron intentos de asentamientos de familias en riveras de caño Paujil, Candilejas y al otro lado del Río Guayabero en Tierra Dentro.


Además del pasado intento de incursión, también se sabe que la presencia de los Grupos Sucesores del paramilitarismo en meses recientes ha estado acompañada de extorsiones dirigidas a comerciantes e incluso a pequeños agricultores. Estas prácticas las desarrollan no solamente mediante mensajes extorsivos vía llamadas telefónicas, sino que además las ejecutan con incursión en territorio (sobre todo en centros poblados y cabeceras municipales) a partir de pequeñas unidades de hombres armados que hasta el momento la población civil cataloga como desconocidos. A juicios de la Defensoría del Pueblo, estos pequeños grupos pueden configurarse en avanzadas de los actores armados no estatales parte del conflicto Sucesores del Paramilitarismo para obtener información de la población, apoyo logístico y realizar incluso homicidios selectivos.

Entre los sectores donde se sospecha de la presencia de sujetos desconocidos y armados, se identifican las inmediaciones de las veredas Cafetales y Jardín de Peñas en el municipio de Mesetas. En los alrededores de dichas veredas, se vienen presentando extorsiones y amenazas más o menos desde octubre del año 2019. Las versiones obtenidas hasta ahora señalan que se observan hombres al parecer con acentos y rasgos físicos de origen caribeño, quienes contactan a la comunidad para extorsionarlos. La presencia de dichos sujetos alcanza las riberas del río Sansa; hasta el momento no se cuenta con suficientes elementos informativos como para inferir a cuál de estos actores armados no estatales parte del conflicto pertenecen (A.G.C. o Bloque Meta).

3. FACTORES TERRITORIALES QUE DINAMIZAN LA DISPUTA, EL CONFLICTO ARMADO Y EXACERBAN LAS VULNERABILIDADES SOCIALES

La población civil que habita las zonas rurales y urbanas del territorio jurisdicción de los municipios de Uribe y Mesetas, aún enfrentan los efectos de factores estructurales relacionados con la débil garantía e indefinición de derechos de propiedad sobre la tierra, presencia precaria y diferenciada del Estado en sus territorios, frágil acceso a la justicia y débil prestación de servicios sociales que no garantizan el completo disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes.

En la actual coyuntura de exacerbación de las dinámicas violentas del conflicto armado y la disputa territorial por los diferentes grupos armados organizados (frentes de las Facciones Disidentes de las FARC, AGC y Bloque Meta), los factores históricos y estructurales aún sin resolver, contribuyen a potenciar las variables de amenaza y vulnerabilidad que configuran en el territorio el escenario de riesgo para los Derechos Humanos de su población residente.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 37 de 75

Si bien es cierto que ambos municipios han sido focalizados o priorizados por el Gobierno Nacional para ejecutar varios programas y proyectos en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, suscrito a fines de 2016 entre las FARC EP y el Gobierno Nacional de entonces, su grado de implementación y avance son muy limitados frente al nivel de problemas existentes y de la insatisfacción de derechos políticos y así como derechos económicos sociales y culturales.

En este sentido, hay factores de vulnerabilidad tan complejos que no ha sido posible superarlos, aún en fase de implementación de los acuerdos de paz y que en esta coyuntura, inciden para que algunos grupos armados como las Facciones Disidentes de las FARC enarboleden justificaciones ideológicas y políticas para continuar en la guerra, entre otras intenciones.


A continuación, se describen algunos de los factores estructurales que inciden en la tensión y exacerbación de la violencia derivada de la presencia y accionar de actores armados no estatales parte del conflicto en el territorio y demás conflictividades socioambientales.

3.1. DINÁMICAS TERRITORIALES: MEGAPROYECTOS, DEFORESTACIÓN, CULTIVOS DE COCA Y PRESENCIA DE MAP/MUSE/AEI

El territorio de Uribe y Mesetas, como ya se dijo antes, por sus condiciones ambientales y ecosistémicas únicas, sumadas a su ubicación geográfica entre el piedemonte Llanero y Amazónico y la zona Andina, resulta estratégico para acceder a los valles interandinos de los departamentos del Huila y Tolima (Alto Magdalena). Sin embargo, con la presencia de las FARC EP en dichas jurisdicciones territoriales, las iniciativas para llevar a cabo megaproyectos viales y de transporte de hidrocarburos, se han mantenido a la espera de poder contar con condiciones pacíficas que permitan la construcción de cualquier proyecto de infraestructura.

Las expectativas y esperanza que generó los Acuerdos de paz con las FARC EP, hicieron suponer que muchas de las condiciones estructurales de atraso y marginalidad en las que se encuentra la población de estos territorios, por fin iban a cambiar. Sin embargo, sólo se logró disfrutar de un corto periodo de disminución de las acciones violentas comprendido entre 2016 y finales de 2017. Desde entonces se han venido repitiendo las circunstancias de amenazas, miedo, temor y zozobra en la población, sin que se haya incluso superado aún los rezagos y afectaciones de la guerra en el territorio, como por ejemplo la existencia de MAP/MUSE/AEI que limitan el aprovechamiento de la tierra en las actividades vocaciones del campesino.

Asimismo, las condiciones del territorio bajo el control de las FARC EP hasta 2016, y ahora con el resurgimiento de las Facciones Disidentes de lo que fuera ésta organización armada insurgente, ante la limitada implementación de programas de desarrollo económico y productivo, también han propiciado la persistencia de actividades ilícitas en sus jurisdicciones como vía para solventar las necesidades básicas de la población

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 38 de 75

campesina, la cual debe recurrir todavía a depredar los recursos naturales del ecosistema protegido para poder sobrevivir.

En consecuencia, son estos factores los que se consideran problemas estructurales del territorio, los que de alguna manera u otra inciden aún en la determinación de los ciclos de violencia y conflictividad armada y social. Su persistencia contribuye a profundizar las trampas de pobreza de la población y el territorio.

A continuación, se realiza una descripción de algunos de ellos y su incidencia en los municipios de Uribe y Mesetas.

3.1.2. De los Megaproyectos con alto impacto en Uribe y Mesetas

Los municipios de Mesetas y Uribe hacen parte del trazado de megaproyectos de transporte de hidrocarburos y de construcción de infraestructura vial. Esta situación no puede pasar desapercibida, pues en la medida que dichas propuestas avancen más allá de la etapa de estudios, diseños y licenciamiento para su ejecución, sus impactos podrían ser positivos o negativos según sean vistas las consecuencias ambientales, sociales, económicas y políticas, en cuyo centro se encontrarán las comunidades campesinas y étnicas vulnerables.


Los dos megaproyectos de mayor envergadura, planificados a futuro y que inciden de manera directa con los Municipios de Uribe y Mesetas son: i) El Oleoducto al Pacífico (OAP) y ii) El corredor vial Pacífico Orinoquia.

i) El Oleoducto al Pacífico (OAP):

Es un megaproyecto que transportará la exportación de Crudos e importación de diluyentes desde el puerto de Buenaventura hasta la cuenca sedimentaria Llanos (CPO). Esto permitirá transportar crudos pesados desde el Meta y Caquetá a los puertos petroleros. Según los estudios de proyección, tendrá una longitud aproximada de 780 Km. Las regiones afectadas serán la Orinoquia, Amazonia, Andina y Pacífica. Atravesará cuatro departamentos y 29 municipios, en la jurisdicción de cuatro Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), ver Mapa 4.

En el Auto 1234 de 4 de abril de 2014, la ANLA seleccionó la alternativa 1 y estableció los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental (EIA). El Ministerio de Minas autorizó el inicio de los Estudios a través de la Resolución No. 72411 del 13-agosto de 2013. Se ha incluido como proyecto de interés nacional y estratégico (PINES). También se han emitido los Certificados del Ministerio del Interior, correspondiente a 8 consultas previas en el Tolima y 6 en Buenaventura. De las anteriores, se han Protocolizado 5 consultas de 8 en el Tolima (5/8) y tres pre consultas en Buenaventura de seis (3/6).

El Proyecto OAP también incluye la construcción de un sistema de transporte que se conecta con el oleoducto principal, conocido como Oleoducto Tapir, para servir a la

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 39 de 75

cuenca Caguán Putumayo. Sin embargo, existe un concepto negativo de Parques Nacionales para el trazado Tapir, ya que pasaría por el Parque Nacional Natural de Los Picachos. A partir de este concepto negativo de la Unidad de PNN, la evaluación del Diagnóstico de Alternativas Ambientales (DAA) fue suspendida. Sin embargo, ha sido incluido como proyecto de interés nacional y estratégico (PINES).

A pesar de los avances en estudios y consultas en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, los trayectos correspondientes al municipio de Colombia (Huila) y Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Granada y San Martín (Meta) siguen sin iniciar.

El OAP será construido por el consorcio empresarial Oleoducto al Pacífico SAS, conformada por las empresas Enbridge Inc. (Canadiense), Cénit (Sociedad Comercial Colombiana filial de la compañía Ecopetrol), Pacific Rubiales Energy Corp (Canadiense), Vitol Group (Holandesa con sede en Suiza), Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. ESP (filial del Grupo Energía de Bogotá) y Cerrito Capital.

Las comunidades y habitantes de las áreas de influencia del proyecto se enfrentan a encrucijadas sin resolver. La suerte de los habitantes de las áreas de influencia directa respecto a los procesos de servidumbre en el entendido de que muchos predios no tienen derechos de propiedad definidos. Asimismo, las garantías frente a los impactos ambientales para los nacederos de agua por las cuales pasará este Oleoducto, la protección de la fauna nativa, pues no se sabe si la construcción del oleoducto será una interrupción entre ecosistemas como páramos y corredores biológicos de flora y fauna, entre otros.

Finalmente, de continuar la presencia de los actores armados no estatales parte del conflicto como las Facciones Disidentes de las FARC en el territorio de Uribe y Mesetas, este proyecto contribuirá a exacerbar las amenazas y atentados contra sus empleados, equipos, campamentos y vehículos, entre otros, lo cual demandará mayor seguridad de la fuerza pública.

ii) El corredor vial Pacífico Orinoquia:

La Conexión Pacífico-Orinoquia es una de las obras más ambiciosas que se realizan en el país y pretende atravesar la geografía de Oriente a Occidente y unir al Valle del Cauca con el Vichada, a través de los departamentos del Tolima, Huila y Meta. El proyecto se gestó en 2012.

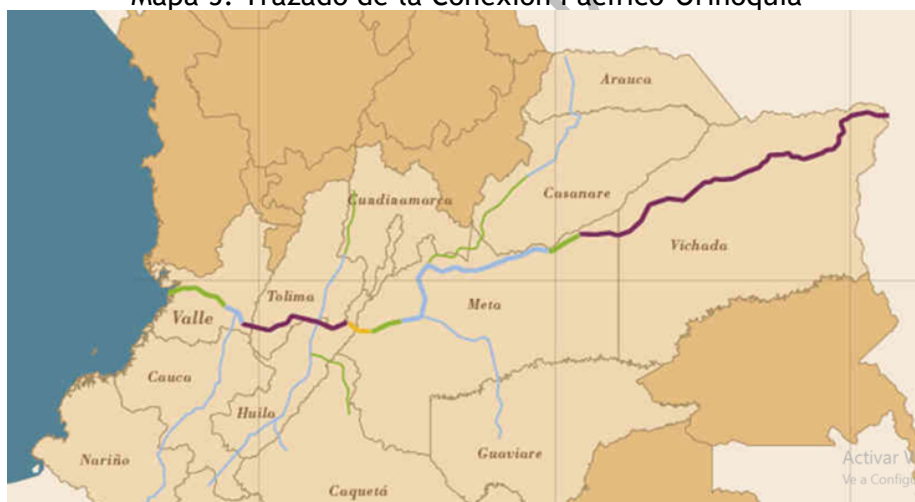
La Conexión Pacífico-Orinoquia está dividida en ocho tramos y su extensión total es de 1.490 kilómetros; de ellos, 819 Km. se encuentran en estudios; 373 Km. ya fueron construidos; 268 km se hallan en ejecución y, 30 kilómetros no tienen todavía estudios de trazado. A la fecha el 55% de las obras sigue en estudios a cargo del Instituto Nacional de Vías. Según el Plan Maestro de Transporte Intermodal de 2015, este es un proyecto prioritario.

Mapa 4. Trayectoria del Oleoducto al Pacífico




Fuente: OAP recuperado de <http://www.infraestructura.org.co/filef.php?IDe=1476>

Mapa 5. Trazado de la Conexión Pacífico-Orinoquia



Fuente: Revista Semana 15/06/20. Recuperado de <https://www.semana.com/contenidos-editoriales/valle-del-cauca-la-tierra-sabe/articulo/la-conexion-pacifico-orinoquia-conectara-el-pais-con-buenaventura/630890>

Este enorme corredor vial atravesaría un territorio que acoge al 32% de la población total del país, y en él, entre llanuras y valles, se produce el 97% del Azúcar de Colombia, el 93% del Etanol, el 77% del Petróleo, el 50% de la Palma y el 47% del Arroz. Además, se encuentra el 28% de las tierras dedicadas a la Ganadería.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 41 de 75

Los ocho tramos en que se distribuye la Conexión Pacífico-Orinoquia, cinco se ubican en el departamento del Meta, y tres atraviesan los municipios de Mesetas y Uribe (tramos 4, 5 y 6).

Hoy, según el INVÍAS, se encuentran en ejecución dos proyectos de estudios y diseños en los tramos 3 y 8. Estos están en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Huila, y la Conexión Puente Arimena-Puerto Carreño, en los departamentos del Meta y Vichada.

La ejecución de estos dos megaproyectos (El Oleoducto Al Pacífico -OAP- y el corredor vial Pacífico-Orinoquia), puede suponer un incremento del riesgo para las comunidades de Uribe y Mesetas que habitan las zonas de impacto de dichos proyectos. Lo anterior debido a que los grupos armados no estatales, en búsqueda de golpes de alto impacto mediático y humanitario, pueden generar posibles atentados con efectos indiscriminados. También por las eventuales presiones económicas (exacciones y extorsiones) por parte de las Facciones Disidentes de las FARC (frentes 40, 7 y 1) a empresarios, contratistas y transportadores. Asimismo, por el interés de los actores armados no estatales parte del conflicto Sucesores del Paramilitarismo Bloque Meta y AGC, que se pueden fortalecer ante un fuerte incentivo para incursionar en la disputa por el territorio.

En consecuencia, ante los inicios de este tipo de proyectos en la jurisdicción de estos dos municipios, es necesario advertir la posible intervención de ambos actores armados no estatales parte del conflicto, tanto los sucesores del Paramilitarismo como las Facciones Disidentes de las FARC (frentes 1, 7 y 40), en el desarrollo de las eventuales conflictividades sociales y ambientales que se susciten entre empresas constructoras, agencias del Estado y campesinos, en el marco de la ejecución de las diferentes etapas de estos proyectos. Como resultado de tales disputas y conflictos, se pueden configurar Desplazamientos Forzados (Individuales y Masivos), homicidios selectivos y múltiples, Desapariciones Forzadas, amenazas y otras graves vulneraciones a los derechos humanos y jurídicos de las empresas.

3.1.3. Deforestación en el Parque Nacional Natural Tinigua

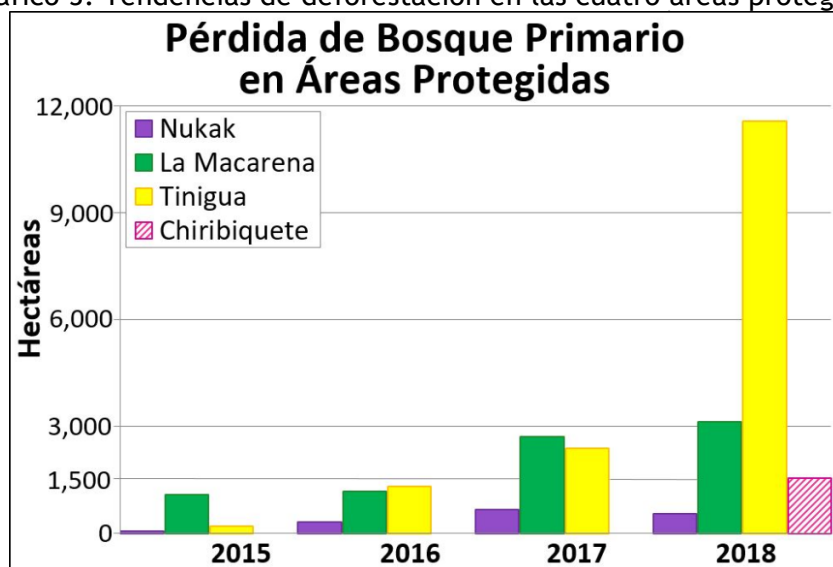
El Parque Nacional Natural Tinigua está ubicado en el departamento del Meta, tiene una extensión de 208.000 hectáreas, de las cuales el 31% se ubican en el municipio de Uribe y el 69% en el municipio de La Macarena. Su localización con respecto al AMEM constituye un corredor ecosistémico entre los PNN Cordillera de Los Picachos y la Sierra de La Macarena, y los Distritos de Manejo Integrado (DMI) Ariari - Guayabero y Macarena Sur.

El parque Tinigua tiene un gran valor estratégico en términos ambientales, militares y económicos, como pocos territorios del país. Por él atraviesa la proyección del trazado de los dos megaproyectos descritos anteriormente, para conectar con el Pacífico,

Puertos marítimos y territorios costeros. Desde El Tinigua se puede acceder a la capital de la República y al Sur y el Oriente de Colombia. Desde el punto de vista minero energético, se ubica en medio de dos importantes cuencas petroleras (Llanos y Caguán - Putumayo) con altos potenciales de reservas, lo cual mantiene las expectativas de las empresas operadoras por obtener las licencias ambientales para su exploración y explotación. De allí su importancia para que su territorio sea considerado en la trayectoria para las líneas de flujo de hidrocarburos.

El último reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Conservación Amazónica (ACCA), en colaboración con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Colombia, muestra cómo la deforestación está impactando fuertemente a los Parques Nacionales Sierra de la Macarena, Tinigua, Serranía de Chiribiquete y la Reserva Nukak.

Gráfico 3. Tendencias de deforestación en las cuatro áreas protegidas




Tendencia de deforestación en cuatro áreas protegidas (2015-2018). Datos: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, RUNAP.

Con preocupación se observa que luego de la firma del acuerdo de Paz y entrega de armas de las FARC EP, a partir del año 2017, la deforestación en el parque Tinigua ha ido en aumento exponencial, tanto que organizaciones especializadas en el monitoreo y análisis de dicho fenómeno como MAAP⁵, ACCA⁶, FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible)⁷, sus análisis de deforestación muestran la preocupante tendencia de pérdida de bosque que se vive en parques nacionales como Sierra de La Macarena, Tinigua y Chiribiquete y la reserva Nacional Nukak.

⁵ <https://maaproject.org/pais/colombia>

⁶ El MAAP, una iniciativa de Conservación Amazónica-ACCA, utiliza tecnología satelital para monitorear la deforestación en tiempo real en cinco países de la Amazonía: Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador

⁷ <https://fcds.org.co>

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 43 de 75

Según las referidas fuentes, en uno de los gráficos presentados en el reporte, la deforestación de bosque primario en Tinigua pasó de casi 3.000 hectáreas en 2017 a casi 12.000 en 2018 (un aumento de casi 400 %). Según información de la FCDS, el parque Tinigua en su zona sur tiene un proceso de intervención persistente durante los últimos tres años, donde la zona mejor conservada está quedando hacia el norte del río Guayabero.

Por su parte, el parque Sierra de La Macarena, también ha presentado un aumento consistente de pérdida de bosque desde 2016 y que se empieza a parecer a lo que ocurre en Tinigua: una fragmentación del corredor Andes-Orinoquía-Amazonía. Igualmente, para el Parque Chiribiquete, un año después de que se ampliara, ya se habían deforestado 2.600 hectáreas.


Algunos de los datos más relevantes del estudio, ilustran fehacientemente la creciente deforestación: durante 2016-2018 se deforestaron 29.000 hectáreas en las cuatro áreas protegidas. Para finales de julio de 2019 se deforestaron 4.300 hectáreas y tres de los parques (Tinigua, Chiribiquete y Macarena) perdieron más de 1.000 hectáreas cada uno. El Parque Nacional Tinigua es el área protegida más impactada por la deforestación, pues entre 2017 y julio de 2019 perdió 16.000 hectáreas, con un pico pronunciado en 2018. Y el Parque Nacional Chiribiquete perdió 2.600 hectáreas desde su expansión en julio de 2018, de las cuales, el 96 % era bosque primario.

Hoy esta área protegida enfrenta múltiples problemas. Uno de ellos es que PNN solo cuenta con 14 funcionarios para ejercer autoridad en la zona. Esto muestra, en teoría, que un solo funcionario debe cuidar poco más de 15.000 hectáreas, lo cual es imposible.

A esto se le suma la circulación de panfletos emitidos por Facciones Disidentes de las FARC en los que amenazan y prohíben el ingreso de los funcionarios a los parques. Como ejemplo de ello, el SAT conoció la circulación del panfleto cuyo encabezado se define como "comunicado público", calendado el 10 de Abril de 2020, a nombre de las *"Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC EP, Unidad John Linares - Frente Comandante Jorge Briseño"*, que circuló inicialmente por el sector Sur del territorio de influencia de la Serranía de La Macarena, y se estima que también se haya extendido hasta el sector Norte, los municipios de Mesetas y Uribe, abarcando también área de influencia del parque Tinigua. En su contenido rechazan la presencia de las organizaciones internacionales OEA y USAID, así como operadores de sus proyectos como: Misión Amazónica, Gilbert Austria, Instituto Amazónico de Investigación científica SINCHI, la Corporación para el Desarrollo de la Amazonia CDA, CORMACARENA y Parques Naturales Nacionales. Además, les advierten a las comunidades campesinas que de colaborar con cualquiera de estas entidades o hacer parte de sus programas y proyectos, serán *"declarados objetivo militar"*.

3.1.3.1 Intereses de actores armados en territorio del parque Tinigua:

Como interés en el territorio del Parque Tinigua para los actores armados, en especial para el ACTORES ARMADOS NO ESTATALES PARTE DEL CONFLICTO Facciones Disidentes

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 44 de 75

de las FARC (frente 40), se tiene que fue allí donde históricamente el secretariado de las FARC-EP ejercía control y se promovieron colonizaciones campesinas desde los inicios de este grupo armado en la década del 60 en adelante. Actualmente, en la zona Norte del río Guayabero, donde poco o nada se ha dado la deforestación, esto se debe a la presencia de dichas Facciones Disidentes de las FARC, frente 40, quienes pretenden seguir manteniendo control en la zona protegida, como sitio de ocultamiento, de tránsito y de avituallamiento. Desde allí planifican y lanzan sus operaciones y atentados militares contra la fuerza pública, con riesgo de eventual interposición de Población Civil.


Como estrategia de control social y territorial, el frente 40 de las Disidencias de las FARC han recurrido a las amenazas contra funcionarios de Parques Nacionales, Cormacarena y líderes ambientales a través de panfletos amenazantes en los que los declara objetivos militares, llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp; lo anterior, con el propósito de poder ser ellos los que controlen y determinen cómo se debe ir deforestando el parque Nacional Natural Tinigua. Actualmente es el área protegida más deforestada de Colombia.

Los fines de la deforestación en estas áreas, se resume en ganadería extensiva ilegal y el acaparamiento de tierras para comercializarlas e imponer valores especulativos. Pese que los parques Tinigua y Macarena están separados por el río Guayabero, a pesar de su cercanía, la deforestación afecta de manera más fuerte al Tinigua. Pues el suelo firme del Tinigua es más apropiado para la ganadería que el suelo de vegetación rupícola, es decir, que crece sobre roca de la Macarena. Lo anterior, sin perjuicio de los intereses históricos de controlar el área del parque con el propósito de cultivar coca e instalar cristalizaderos.

Aunque la tendencia del interés de los grupos armados ha mutado luego de la firma de los Acuerdos de paz, trascendiendo del control de terreno y deforestación para la economía de la Coca al control del terreno y deforestación para explotación ganadera, de igual manera el frente 40 ejerce tal control que decide quién y cómo explota las áreas deforestadas. En este sentido, se ha observado que después de 2017 se ha notado el aumento de familias migrantes al área del Tinigua; cientos de familias campesinas procedentes sobre todo de los Departamentos del Caquetá y Guaviare, buscan oportunidades en la colonización de dichas áreas.

Lo anterior podría sugerir que el modo de producción que impulsan los grupos armados, luego de los acuerdos de Paz, estaría diversificándose hacia inversiones de importantes capitales relacionadas con el negocio de la ganadería ilegal.

Al parecer se valen de la condición socioeconómica y mano de obra campesina colonizadora de la región, tanto de comunidades establecidas históricamente como de las que han ingresado al área en los últimos dos años. Quienes acepten participar en el negocio, lo hacen mediante la modalidad del “partir” (o también conocida como “a medias”); es decir, el socio capitalista (desconocidos que presumiblemente manejan las finanzas de actores armados no estatales parte del conflicto frente 40 de las facciones

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 45 de 75

disidentes de las FARC) al parecer aporta el dinero inicial para financiar las labores de la tala de bosques primarios, ponen el ganado e insumos a disposición de los campesinos, quienes lo cuidan y luego de varios meses que el bovino esté con el peso suficientemente apto para la venta, se dividen ganancias producto de la comercialización.

A pesar de las crecientes ganancias de este depredador modelo, para el campesino colonizador esta oportunidad representa la única vía para obtener ingresos que les permiten satisfacer las necesidades de sus familias en estos entornos marginales; por tanto, el patrocinio que les ofrecen en ese sentido para continuar ampliando fincas, será siempre un incentivo para continuar deforestando y potrerizando.

El impacto de la deforestación en Colombia tuvo como respuesta por parte del Gobierno Nacional, la implementación en abril de 2019, de la que denominó Operación Artemisa, estrategia principalmente militar que busca frenar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la tala y quema de bosque. Fue diseñada para ser ejecutada prioritariamente en los Parques Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos.

Los operativos de la Operación Artemisa en el territorio del Meta, ha tenido intervenciones en su cuarta fase, durante el mes de febrero de 2020; las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y el IDEAM, desarrollaron varios operativos tendientes a la recuperación de aproximadamente 1.900 hectáreas deforestadas del Parque Nacional Natural Tinigua.

Durante el operativo fueron capturadas 20 personas (8 mujeres y 12 hombres), por su presunta responsabilidad en delitos ambientales. Teniendo en cuenta que los capturados resultaron ser campesinos habitantes de las áreas del Parque, la operación suscitó la movilización campesina, que congregó a cientos de personas de la región, en cuyo fragor también ocurrió la retención de dos miembros del Ejército Nacional por parte de las comunidades campesinas.

Al respecto, los campesinos expresaron su inconformismo por la manera en que se adelantó la operación, al sentirse atropellados y vulnerados por parte del Estado. Ante la ausencia de oportunidades, falta de políticas públicas de desarrollo rural y del incumplimiento de los programas de la RRI, se ha configurado una acción colectiva de fuerte rechazo campesino a las intervenciones del Ejército Nacional en el marco de la Operación Artemisa. Consideran, además, que antes de la agresiva intervención militar, se deberían brindar oportunidades y alternativas de vida y producción para el sustento de dichas familias campesinas habitantes de las áreas catalogadas como zonas protegidas.

El malestar comunitario y la acción colectiva de rechazo a las medidas de la fuerza pública, también es aprovechada por las Facciones Disidentes de las ex FARC, que encuentra en dicha conflictividad socioambiental, una oportunidad para incidir en las

movilizaciones campesinas, incluso, de ser necesario, por la vía del constreñimiento. Una manera de acrecentar la participación es imponiendo multas para quienes se nieguen a participar o incluso retaliaciones contra la integridad personal, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y/o afectaciones a los bienes de los campesinos.

En consecuencia, los campesinos se encuentran en un círculo vicioso cuyo desenlace puede ser fatal para sus derechos fundamentales y la de sus familias: el Estado utiliza a la fuerza pública para desalojar las áreas protegidas buscando con ello evitar la tala del bosque y erradicar cultivos de coca; sin embargo, en relación al cumplimiento de los programas relacionados con la RRI, PNIS, PDET, seguridad alimentaria y demás mecanismos de acceso a la tierra y reconocimiento de ZRC, se muestra descoordinado, desarticulado y disperso entre las diferentes agencias competentes. Por su parte los grupos armados no estatales, también presionan para justificar y regular la tala de selva, la potrerización, la ganadería y la siembra de coca, como una bandera política que demuestre el fracaso del Estado en este sentido.

Un escenario de riesgo adicional podría configurarse a partir de la eventual incursión de los actores armados no estatales parte del conflicto Bloque Meta y/o A.G.C., que provenientes de la subregión del Ariari pudieran ingresar al territorio del parque Tinigua, ante lo cual se suscitarían confrontaciones armadas con el frente 40 de las Disidencias de las FARC.

El interés de estos grupos armados ilegales, estarían centrados en los lucrativos mercados de acaparamiento de las tierras y del control de la rica ganadería de la región. Adicionalmente, aprovechar la dinámica de la economía cocalera a través el control de la instalación de cristalizaderos de cocaína, cuya localización ha sido histórica en zonas de Reserva de la Región del AMEM.


3.1.4 Actividades y cultivos ilícitos (coca) en el territorio

En el más reciente informe de UNODC, “Monitoreo de Territorios afectados por cultivos ilícitos con corte a 2018”, publicado en agosto de 2019, se evidencia reducción en el número de hectáreas cultivadas con Coca en el Departamento del Meta, el impacto sigue siendo fuerte en las áreas protegidas de los municipios de Uribe y Mesetas. Las cifras que registra el informe para el PNN Tinigua, dan cuenta de 7.981 hectáreas para 2016, 8.288 hectáreas para 2017 y 7.844 hectáreas para 2018.

Cuadro 1. Cultivos de coca por departamento (hectáreas), 2010 - 2018

Departamento	Dic, 2010	Dic, 2011	Dic, 2012	Dic, 2013	Dic, 2014	Dic, 2015	Dic, 2016	Dic, 2017	Dic, 2018	Cambio 2017-2018 (%)	Total 2018 (%)
Meta	3.008	3.039	2.699	2.898	5.042	5.042	5.464	5.577	2.945	-47	2

Fuente: Informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos 2018.
UNODC (agosto 2019)

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 47 de 75

A pesar de la baja reducción que se observa, esta área contrasta con el aumento de otras formas de producción, como la Ganadería, la cual registra un impresionante aumento en la deforestación para dicho propósito (potreros).

En relación con el narcomenudeo en el departamento del Meta, esta es una actividad que ha venido en ascenso; el comercio principalmente es de marihuana y cocaína en los circuitos de circulación interna del departamento. Atendiendo a las cifras oficiales sobre producción de base de coca en la región, en 2017 el 47 % se produce en el Guaviare, 37% en el Vichada y 17% en el Meta.

La comercialización ilícita de marihuana toma mucho peso en el departamento del Meta, siendo un producto de renta significativa. Principalmente dos tipos de marihuana se distribuyen: la Creepy, que es traída desde el Cauca (representa el 70% del mercado local) y la marihuana regular, que se cultiva en los municipios de Mesetas y Lejanías, se acopia en Granada y circula por el eje vial Acacias, San Martín y Granada.

No se descarta que exista una grave problemática de consumo que deben atender todos los municipios del departamento. En el marco del monitoreo del SAT, se determinó que el consumo en NNAJ no es fenómeno ajeno sobre todo en cascos urbanos de Uribe y Mesetas.


3.2. PROGRAMAS INSTITUCIONALES CON IMPACTO EN EL TERRITORIO

Han sido algunas políticas públicas de orden nacional las que se han proyectado a través de diferentes Decretos Presidenciales, expedidos para poder materializar la implementación del Acuerdo de Paz suscrito a fines de 2016 entre las FARC EP y el Gobierno del entonces presidente Santos.

3.2.1. De la Renovación Territorial por medio de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El 25 de enero de 2019 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR– para la región Meta-Guaviare, que recoge cerca de 1.700 iniciativas de las comunidades de 12 municipios, ocho del Meta y cuatro de Guaviare. El municipio de Mesetas firmó el Pacto Municipal para la Transformación el día 14 de diciembre de 2018 y el municipio de Uribe hizo lo mismo al día siguiente.

Dichos programas son un instrumento importantísimo de planeación de mediano y largo plazo, que crea el Acuerdo Final (2016) y que tiene como objetivo el desarrollo, la transformación estructural del campo y el ámbito rural en los próximos 10 años (Artículos 1 y 2 del Decreto 893 de 2017). Como instrumento de planificación y gestión, de manera prioritaria se proyecta implementar los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales en los municipios priorizados, en este caso Mesetas y Uribe (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 48 de 75

Se observa que los planes e instrumentos de planeación aplicados en la primera etapa (Pactos Comunitarios y Proyectos de Infraestructura Comunitaria -PIC-), poco apuntan a incluir el impacto generado a partir de los megaproyectos que atraviesan la zona, la actual dinámica de tráfico de drogas y de sustitución de cultivos de uso ilícito, como tampoco la permanencia de excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil que se encuentran ubicados en los núcleos veredales, en los AETCR y Zonas Aledañas. La desatención de estos factores presiona negativamente la ya débil oferta institucional y los índices de pobreza multidimensional, que como se verán, al año 2019, son muy desalentadores. Es decir, que este factor territorial de planeación, eventualmente podría agudizar mucho más las vulnerabilidades sociales e institucionales.


3.2.2 Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Como quedó pactado en el Acuerdo Final (2016) suscrito entre el Gobierno Colombiano y la FARC - EP, en el punto 4 denominado "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas", y reglamentado además a través del Decreto 896 de 2017 que crea y reglamenta el PNIS, el cual tiene como fin promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, por medio del desarrollo de programas y proyectos que desarrollarán las familias que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito (Art. 1). Los beneficiarios (art 6) serán las familias que voluntariamente adquieran como compromiso las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar vinculadas con labores relacionadas con los cultivos de uso ilícito, y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016.

Ahora bien, para que el Gobierno cumpla el Programa necesita que se den condiciones como: 1. Seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. 2. Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo -PISDA-. 3. Los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades. 4. Priorización de territorios. 5. Tratamiento Penal Diferencial (art 7, Decreto 896).

Preocupa mucho que el accionar de los actores armados ilegales, especialmente de las Facciones Disidentes de las FARC, permitan el desarrollo y continuidad del programa, toda vez que su pervivencia está directamente relacionada con el narcotráfico. Algunas fuentes le han asegurado a la Defensoría del Pueblo, que alias "Calarcá" ha dado orden expresa a las comunidades de no participar en el programa de erradicación y sustitución; esta situación los expone a la disyuntiva de acatar los compromisos adquiridos en la firma de los Acuerdos voluntarios en los municipios de Uribe y Mesetas. Por ello, han solicitado que se tenga en cuenta esta realidad antes que la sola intervención de la fuerza pública para adelantar la erradicación forzada; así mismo, el tratamiento diferencial en el área penal a la hora de adecuar las decisiones de política criminal en este sentido.

De otro lado, no está demás reiterar el riesgo en que se encuentran las comunidades y funcionarios involucrados en el desarrollo de este Programa. Es inminente la vulneración de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la comunidad y funcionarios públicos relacionados con el Programa, toda vez que la implementación del programa choca

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 49 de 75

contra un elemento estratégico de financiación del frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC.

3.2.3 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y Zonas Aledañas (antes Nuevos Puntos de Reincorporación -NPR-).

A través del Decreto No. 2026 de 2017 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República reglamentó los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Con ello buscó facilitar la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los ex miembros de las FARC-EP debidamente acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017).

La Defensoría del Pueblo viene realizando una labor de monitoreo de los hoy, Antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación AETCR (actualmente en tránsito a centros poblados), específicamente del AETCR “Mariana Páez”, ubicado en la vereda Buenavista, del municipio de Mesetas, con ocasión de homicidios ocurridos como se verá adelante. El 15 de agosto de 2019 terminó la figura jurídica transitoria de los AETCR, lo cual no significó la desaparición de dichos espacios ni el desalojo de los excombatientes y sus familias quienes los habitan.

Además de los AETCR hoy se reconocen tres asentamientos colectivos, denominados Zonas Aledañas; una ubicada en Mesetas, denominada Zona Aledaña Simón Trinidad; y dos en Uribe, denominadas Zona Aledaña La Pista y Zona Aledaña El Diamante. En los siguientes cuadros se hace la descripción demográfica de cada AETCR y cada Zona Aledaña.


Cuadro 2. AETCR y Zonas Aledañas en los municipios de Mesetas y Uribe

Municipios	Categoría según Decreto No. 2026 de 2017	Nombre asignado	No. de personas	No. de núcleos familiares
Mesetas	Antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación	AETCR La Guajira	161	134
Mesetas	Zonas Aledañas	Zona Aledaña Simón Trinidad	32	36
Uribe	Zonas Aledañas	Zona Aledaña La Pista	108	71
Uribe	Zonas Aledañas	Zona Aledaña El Diamante	65	42
Total de Zonas Aledañas			205	149
Total de personas en AETCR y Zonas Aledañas			366	283

Fuente: ARN, corte a mayo de 2020

Como se observa, hay un total de 366 personas que corresponden a 283 familias habitando dichos lugares. Este resultado indica que se ha configurado toda una dinámica social y familiar innegable y que sigue en crecimiento hacia el interior de cada AETCR y Zona Aledaña; amén de su relacionamiento con las dinámicas que existen en el municipio y departamento.

Como concreción del escenario de riesgo que se plantea en la presenta Alerta, en lo que corresponde a población excombatiente de las FARC y los espacios que hoy en día éstos

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 50 de 75

ciudadanos ocupan, el SAT ha registrado dos hechos victimizantes ocurridos el día 12 de Junio de 2020, que afectan a éstas PER y sus familias; el primero da cuenta del homicidio del joven Bayron Eliecer Gómez Restrepo, cuya progenitora es miembro de la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -componente FARC-, hecho ocurrido en el interior del AETCR Mariana Páez del Municipio de Mesetas. Este homicidio estuvo precedido de la circulación de un panfleto amenazante en el que al parecer la víctima estaba incluida con el sobrenombre de “El Diez”.

El segundo hecho victimizante ocurrió en horas de la tarde del día 12 de Junio de 2020. Se trata del desplazamiento masivo de 18 excombatientes con calidad PER, quienes se encontraban asentados en la Zona Aledaña El Diamante del Municipio de Uribe; allí desarrollaban actividades productivas relacionadas con proyectos agropecuarios. Este desplazamiento involucró además los núcleos familiares (incluyendo niños y niñas) de algunos de éstos ciudadanos.

El desplazamiento estuvo precedido por la emisión de un comunicado de dicha comunidad, en el que anunciaban la situación apremiante que estaban padeciendo con ocasión del riesgo producto del accionar de grupos armados en inmediaciones de la Zona Aledaña. En el mismo comunicado señalan problemas de seguridad y de estigmatización desde que llegaron a dicho territorio a finales del año 2017; y recientemente, de las amenazas de ser despojados de los bienes de la Cooperativa que los asocia (DAINCOOP) y el riesgo de afectación contra sus vidas e integridad personal, pese a tener esquema de protección asignado.


Ambos hechos están registrados en el acápite posterior correspondiente al Cuadro 10 Anexo, que recopila los hechos ocurridos en el marco del escenario de riesgo planteado en la presente Alerta Temprana y que evidencian el escalamiento de la violencia en el territorio.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación los diferentes homicidios ocurridos en el interior y en inmediaciones del AETCR Mariana Páez en Mesetas y los homicidios de excombatientes de las FARC EP en las zonas rurales de Uribe y Mesetas. Asimismo, la situación de amenazas que se han venido incrementando a través de panfletos por parte de las Facciones Disidentes de las FARC, como también de la aparición de grafitis alusivos a los grupos sucesores del Paramilitarismo.

En tal sentido, se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, para que redoblen medidas tanto para los vinculados al proceso de reincorporación, como para la demás población, pues se evidencian afectaciones a sus derechos a la vida, seguridad e integridad personal.

También la Defensoría del Pueblo encuentra entre otras afectaciones a los derechos humanos de la población en proceso de reincorporación, los siguientes derechos:

i) Derecho a la salud (programación de citas, movilidad, accesibilidad, calidad en la prestación de los servicios, entre otros);

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 51 de 75

- ii) Vulneración del derecho a la identidad (relacionado con la expedición de cédulas, sobre todo cuando hay doble identificación);
- iii) Bancarización o acceso al sistema financiero;
- iv) Alimentación (la accesibilidad a los mismos está relacionada con el reconocimiento como integrante FARC-EP o con su ubicación en los censos); y
- v) Seguridad.

Existen importantes avances en el tema de salud, identificación y alimentación; pero aún hay desafíos importantes por superar, especialmente sobre la seguridad personal de los reincorporados.

3.2.3.1 Escenario de Riesgo Actual para los ciudadanos excombatientes de las FARC EP en los AETCR hoy en tránsito a centros poblados, Zonas Aledañas y demás territorio de Uribe y Mesetas.


Los ciudadanos excombatientes de las FARC EP han sido catalogados por la ARN como personas en Proceso de Reincorporación (PER) o Personas en Proceso de Reintegración (PPR). Particularmente para quienes habitan en las jurisdicciones de Uribe y Mesetas, en el marco de su victimización por medio de Estigmatización, Amenazas y Homicidios Selectivos, los actores criminales no distinguen condición de PER o PPR. Al tenor de lo expuesto, son preocupantes tres situaciones fundamentales:

- i) La constante y reiterada vulneración de Derechos Humanos de los que son víctimas estas personas en proceso de Reincorporación que se encuentren viviendo o no, en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), hoy en tránsito a centros poblados y en los espacios que en su momento se catalogaron como Nuevos Puntos de Reincorporación (NPR); igual situación afecta a las personas en Proceso de Reintegración (PPR). Dichas vulneraciones se materializan en estigmatización, amenazas y homicidios selectivos, los cuales a continuación se mencionan:

Cuadro 3. Casos de victimización de PER/PPR en Uribe y Mesetas

Fecha	Lugar	Hecho Victimizante	Victima	Observaciones
15/04/2020	Vereda el Placer, Uribe	Homicidio	Jhon Jairo Londoño Bedoya(PER)	Homicidio Selectivo
15/04/2020	Vereda el Placer, Uribe	Homicidio	Emiliano Zapata Cárdenas (PPR)	Homicidio Selectivo
23/01/2020	Antiguo E.T.C.R. Mariana Páez, vereda Bellavista, Mesetas	Homicidio	Duver Esneider Solano Sánchez	Los hechos dan cuenta de falta de medidas preventivas y de control en la población de reincorporados del ETCR Mariana Páez
24/10/2019	Antiguo E.T.C.R. Mariana Páez, vereda Bellavista, Mesetas	Homicidio	Alexander Parra	Homicidio Selectivo, se desempeñaba como contratista de la ARN
21/11/2018	Vereda la Explanación, Uribe	Homicidio	Sebastián Coy Rincón	Desaparecido desde el 15/11/2018, encontrado sin vida el 21/11/2018

Fuente: Defensoría del Pueblo, SAT.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 52 de 75

ii) El estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población de excombatientes en proceso de Reincorporación (PER), que habita en dichos espacios territoriales, vulnerabilidad surgida esencialmente por cuatro factores de necesidad por resolver:

- Necesidad de Formalización del Espacio Territorial bien sea como centro poblado o cualquier otra denominación pero con la titularidad del Derecho de Propiedad sobre la tierra en que se construyó dicho asentamiento a favor de sus habitantes.
- Necesidad de acceso a tierras para desarrollar proyectos productivos.
- Necesidad de viviendas dignas para la población de reincorporados ya que en la actualidad se encuentran habitando viviendas cuyas paredes son en material de *superboard*, las cuales no representan seguridad alguna para las integridades personales de dichas familias.
- Vías de acceso adecuadas al ETCR, pues dichas carreteras se encuentran en un estado lamentable, por lo que se teme que en épocas de invierno puedan quedar incomunicados, agravando aún más su situación de vulnerabilidad y el riesgo a que están expuestos.

iii) Las constantes amenazas contra sus vidas e integridad personal, que tienen que afrontar por parte de integrantes de grupos armados ilegales, tanto Facciones Disidentes de las FARC, como de Grupos Sucesores del paramilitarismo, quienes los presionan para que hagan parte de los mismos. Como se evidencia, muchas de estas amenazas ya se han materializado en homicidios selectivos y pueden seguir creciendo, lo que los expone a un riesgo que se puede catalogar como Extremo.


Lo anterior refleja el estado de indefensión y exposición en que se encuentran los ciudadanos excombatientes de las extintas FARC EP, lo que sugiere la pronta y adecuada intervención del Estado en dos frentes puntuales: i) Seguridad, y, ii) Atención a sus necesidades básicas insatisfechas.

En la medida en que las diferentes entidades del estado actúen de manera oportuna y eficaz, implementando planes y programas tendientes a superar la barrera de vulnerabilidad en que se encuentran dichos excombatientes (bien sea de manera individual viviendo fuera de los Antiguos ETCR o colectivamente habitando entre ellos), el panorama de afectaciones a sus derechos tendrá un cambio favorable en el bienestar del conjunto social de esta población.

3.2.4 Desminado Humanitario

Como antecedentes de afectación al proceso de desminado humanitario, luego de la firma de los acuerdos de Paz en los municipios focalizados (Uribe y Mesetas), se tienen dos hechos graves que fueron debidamente monitoreados por el SAT de la Defensoría del Pueblo.

i) El 8 de junio de 2017 en la vereda Santa Helena, municipio de Mesetas, tres hombres vestidos de negro, encapuchados y armados con fusiles ingresaron al campamento de la

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 53 de 75

Organización Civil de Desminado Humanitario Ayuda Popular Noruega (APN), luego de amenazar a los miembros de los equipos de desminado que operaban en la zona prendieron fuego a uno de los vehículos de la organización. Los autores del hecho al parecer hacen parte de las Facciones Disidentes de las FARC al mando de alias Calarcá.

ii) En horas de la tarde del 18 de julio de 2018, en la vereda Santander del municipio de Uribe, un grupo de 15 hombres uniformados y armados detuvieron a un equipo de Estudio No Técnico (ENT), de la Organización Civil de Desminado Humanitario The HaLo Trust, conformado por cuatro (4) personas. Los desconocidos obligaron a los miembros de la organización de desminado a descender del vehículo y luego procedieron a incinerarlo. Autoridades militares señalaron que presuntamente la acción fue perpetrada por hombres de la Disidencia de las FARC al mando de “alias” Calarcá. Los hombres armados lanzaron un ultimátum a la organización de desminado señalando que ‘no querían su presencia en los municipios de Mesetas y Uribe’.

Según lo anterior, las operaciones de desminado humanitario se han visto seriamente afectadas en los últimos dos años; aún no se logra consolidar operaciones en la totalidad de los territorios de ambos municipios, pues los operadores solo tienen garantizada seguridad para operar en el casco Urbano de Uribe y en la parte norte del municipio de Mesetas.

Atendiendo la información a la que al SAT ha tenido acceso en las dos últimas mesas transversales de Acción Integral contra las MAP, MUSE y AEI del Departamento del Meta, realizadas en noviembre de 2019 y Marzo de 2020, se observa que de los 29 municipios del departamento del Meta, 8 ya fueron liberados de minas, 7 no tienen reporte de presencia de minas y 14 se encuentran en proceso de desminado humanitario; dentro de éstos últimos se encuentran Uribe y Mesetas.

A continuación, se relaciona un segmento de tabla de un total de los 14 municipios en proceso de Desminado Humanitario, que fueron caracterizados con un color según el grado de intervención en dichas operaciones. Los municipios de Uribe y Mesetas están calificados en color Amarillo, que significa que en estas jurisdicciones municipales hay veredas donde se puede intervenir y otras en las que no es viable que se realicen actividades de Desminado Humanitario (se registra la demarcación Amarilla, según la subdivisión de Zonas y el operador de Desminado).

Cuadro 4. Distribución de zonas de desminado humanitario

No.	Unidad	MUNICIPIO	ZONA	OPERADOR
10	BR7 FUDRA	La Uribe	Zona 1	The HALO
			Zona 2	APN
			Zona 3	The HALO
			Zona 4	ATEXX
14	BR7 FUDRA	Mesetas	Zona 1	The HALO
			Zona 2	BRDEH
			Zona 3	APN
			Zona 4	ATEXX

Fuente: Mesa Transversal de Acción Integral contra MAP, MUSE y AEI, marzo 2020.


Respecto al municipio de Uribe se encuentra demarcado en amarillo debido a que solo se ve viable realizar actividades de desminado humanitario en el colegio Rafael Uribe Uribe, casco urbano. Respecto al municipio de Mesetas, se vienen adelantando acciones de desminado humanitario en el centro del municipio y en la parte Norte del mismo se adelantan actividades de estudios no técnicos. En la parte Sur del municipio no se tienen condiciones de seguridad.

Lo anterior demuestra la incidencia que las Facciones Disidentes de las FARC frente 40 ha tenido y sigue teniendo, sobre todo en las zonas rurales de los municipios que se advierten. Con preocupación se observa que las actividades de los Operadores de Desminado Humanitario en ambos municipios no se están logrando desarrollar en todas las zonas dispuestas para tal fin, lo cual sigue generando un permanente escenario de riesgo en lo que respecta a MAP, MUSE y AEI, que eventualmente pueden afectar a la población Civil.

Como agravante de riesgo, se considera que ante el fortalecimiento y reposicionamiento de las Facciones ex FARC, éstas podrían estar minando nuevas áreas, sobre todo en el Municipio de Uribe y la zona Sur compartida por ambos municipios en inmediaciones de los Parques Naturales Nacionales Tinigua y Serranía de la Macarena.

3.2.5 De la restitución de Tierras

Como evidencia de la vulneración histórica de derechos relacionados con la tierra, bien sea en tratándose de Despojos violentos o de Abandonos forzados de Tierras, en los municipios de Uribe y Mesetas se han elevado solicitudes de Restitución de Tierras; los registros de la Unidad de Restitución de Tierras con corte a abril de 2020, señalan los siguientes resultados.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 55 de 75

Cuadro 5. Registro de solicitudes de restitución de tierras en Uribe y Mesetas

Municipio	No. de solicitudes	Solicitudes inscritas	Solicitudes No inscritas	En Demanda	Con fallo
Uribe	521	19	32	16	0
Mesetas	527	3	27	2	0

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras; corte abril de 2020

Como bien se observa, es evidente que *ad portas* de fenecer la temporalidad de la ley de Restitución de Tierras, aún no hay fallos emitidos frente a las solicitudes elevadas e inscritas, por lo que la incertidumbre de las víctimas afectadas respecto a la aplicabilidad de la figura de restitución de tierras es creciente.


Con preocupación se observa que dicha situación de no materialización de la Ley 1448 de 2011 en tratándose de la restitución de Tierras, puede ser aprovechada por las Facciones Disidentes ex FARC, e incluso de los actores armados no estatales parte del conflicto sucesores del Paramilitarismo, quienes encuentran el mapa del territorio (Uribe y Mesetas) en iguales condiciones a cuando se dio el repliegue del Bloque Oriental de las FARC EP. Es decir, el mapa y configuración del territorio por cuenta de despojos violentos y abandonos forzados de tierras sigue igual, pues si bien es cierto hay solicitudes de restitución de tierras cuyo número en ambos municipios supera el millar, las solicitudes inscritas para ambos municipios no llegan al 1,8% del total solicitado, con un preocupante 0% de fallos.

Lo anterior hace que la reconfiguración de las Facciones Disidentes de las FARC en el territorio, sobre todo en zonas rurales, sea más fácil. Es muy factible que se puedan estar realizando e incentivando una serie de negocios sobre la tierra (compraventa y permutas), lo cual en términos de oponibilidad dentro de los eventuales procesos judiciales, hacen mucho más demoradas e inciertas las decisiones en la fase judicial. En consecuencia, los fallos y su materialización, aún se perciben muy distantes.

3.3 VULNERABILIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Una de las características de los municipios advertidos es que la mayoría de sus habitantes reside en las zonas rurales, la gran mayoría apartadas de los centros poblados, comunidades y familias han tenido que subsistir por generaciones en un territorio en donde el acceso vía terrestre es limitado debido a lo precario de sus carretables, ambos municipios cuentan con una red de vías secundarias y terciarias que dependen de las condiciones climáticas para su transitabilidad, lo que en ocasiones aísla a comunidades enteras, los índices de número de habitantes por kilómetro cuadrado son de 1,5 hab/km² para Uribe y 5,27 hab/km² para Mesetas son ostensiblemente menores al promedio departamental que oscila en 12,42 hab/km² lo que sugiere un mayor aislamiento de las comunidades.

Al revisar el indicador de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), para Uribe que oscila en un total de 60,4% y Mesetas que se encuentra en un total de 45,1% se observa

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 56 de 75

que las brechas de IPM son mayores en los centros poblados y rural disperso, casi doblando el indicador para las cabeceras municipales, por lo que preocupa el número de hogares de estos municipios que no tienen garantías de goce efectivo de sus derechos en aspectos básicos, en la siguiente tabla se desglosan los indicadores por cabeceras y centros poblados y rural disperso.

Cuadro 6. Medida de Pobreza Multidimensional Municipal en Uribe y Mesetas

Municipio	Total	Cabeceras	Centros poblados y Rural disperso
Uribe	60,4	38,5	65,9
Mesetas	45,1	29,5	56,5

Fuente: CNPV, 2028. Fecha de publicación: 31 de enero de 2020

De los dos municipios, es en Uribe en donde se registran los más altos índices de privación; por lo que se necesita de un mayor esfuerzo presupuestal, institucional y de gobernanza para garantizar bienestar social a sus habitantes, los índices de privación para estos dos municipios son de los más altos del departamento del Meta.

El índice de Pobreza Multidimensional para los dos municipios considera cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios; a su vez, estas cinco dimensiones involucran 15 indicadores. Se consideran en situación de pobreza los hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores, en la siguiente tabla se observan los indicadores para los municipios de Uribe y Mesetas:

Las cifras evidencian una preocupante situación de vulnerabilidades, que según lo observado, se centran mayormente en las variables de Trabajo informal (91,9% en Uribe y 88,6% para Mesetas), Bajo Logro Educativo (85,3% para Uribe y 76,5% para Mesetas) y Sin Acceso a Fuente de Agua mejorada (57,1% para Uribe y 30% para Mesetas).


El análisis del porcentaje de privación para estas tres variables, permite inferir lo expuestas que se encuentran las comunidades de las zonas rurales, donde los porcentajes son mucho más elevados; dichas circunstancias de privación, por ejemplo en lo correspondiente al trabajo informal y al bajo logro educativo, facilitan a las Facciones Disidentes de las FARC que puedan realizar acciones de reclutamiento con supuestas promesas de mejorar las condiciones para sus reclutados. Esta situación se hace mucho más viable, en el marco de la actual coyuntura de crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, y que en el Meta ya empieza a registrar contagios en las zonas rurales; hasta el 11 de mayo de 2020, se registra un caso en Mesetas.

Cuadro 7. IPM por privaciones en los municipios de Uribe y Mesetas

Privaciones por variable	URIBE				MESETAS			
	Total	Cabeceras	Centros poblados y Rural Disperso		Total	Cabeceras	Centros Poblados y Rural Disperso	
Analfabetismo	19,7	14,7	20,9		16,1	11,4	19,6	
Bajo logro educativo	85,3	64,9	90,5		76,5	62,9	86,5	
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	2,1	2,5	2,0		2,5	1,9	2,9	
Barreras de acceso a servicios de salud	5,6	2,9	6,3		14,1	12,3	15,4	
Tasa de dependencia	36,3	41,2	35,0		32,4	35,0	30,6	
Hacinamiento crítico	6,6	14,1	4,7		8,5	13,8	4,7	
Inadecuada eliminación de excretas	35,3	4,0	43,2		11,9	1,9	19,3	
Inasistencia escolar	10,1	4,8	11,4		7,2	4,4	9,3	
Material inadecuado de paredes exteriores	10,9	34,2	5,0		2,8	2,0	3,5	
Material inadecuado de pisos	38,8	13,0	45,3		20,6	3,3	33,4	
Rezago escolar	23,7	22,7	23,9		18,4	17,1	19,3	
Sin acceso a fuente de agua mejorada	57,1	3,1	70,7		30,0	0,9	51,3	
Sin aseguramiento en salud	15,0	9,5	16,4		12,1	11,4	12,6	
Trabajo infantil	5,0	1,9	5,8		3,5	2,3	4,5	
Trabajo informal	91,9	86,5	93,3		88,6	87,8	89,2	
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)								
Fecha de publicación: 31 de enero de 2020								

La contingencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, conlleva una disyuntiva para los pobladores de estos municipios. También las actividades comerciales en el territorio están siendo muy golpeada por la actual crisis de COVID 19. Acatar las medidas restrictivas y de prevención adoptadas por los diferentes gobiernos (Nacional, Departamental y Municipal), ocasiona también que quienes viven del trabajo informal se encuentran más expuestos a sufrir mayores privaciones que conduce a la no satisfacción incluso de su mínimo vital (seguridad alimentaria), lo que también suscita ventajas para que el Frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC pueda reclutar con mayor facilidad a éstas personas dispuestas a mejorar sus condiciones de vida.

Lo anterior configura una nueva manera de reclutamiento, ya no forzado, pero si condicionado a acceder ante la oferta del grupo armado dado los altos índices de informalidad; y las medidas de autoaislamiento, también inciden para que las personas más afectadas se vinculen a los actores armados, quienes tendrían que hacer mínimas promesas a sus víctimas.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 58 de 75

3.4. PRESENCIA INSTITUCIONAL CIVIL

Como ya se describió anteriormente, en los municipios de Mesetas y Uribe se cuenta con la ejecución de diferentes programas y proyectos relacionados con los Acuerdos de paz entre las FARC EP y el Gobierno nacional. Su desarrollo ha sido explicado en la sección 3.2 de este Documento. Se relacionan con los temas ambientales, derechos de propiedad sobre la tierra, de atención a los reincorporados y de erradicación y/o sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, la gran mayoría de sus oficinas y funcionarios no cuentan con presencia permanente en los municipios, sino que realizan visitas ocasionales y/o periódicas. Lo anterior, justificados en los riesgos que representa exponerse a los grupos armados ilegales.

También se cuenta con la intervención de las alcaldías municipales, y en menor medida de la Gobernación del Meta. Al respecto, hay que decir que los municipios de Uribe y Mesetas son de sexta categoría fiscal; por tanto, sus presupuestos de funcionamiento y de inversión también son limitados. Lo anterior es contradictorio frente a la necesidad de una fuerte intervención institucional que permita ampliar la presencia de los diferentes funcionarios y programas públicos en toda la jurisdicción municipal y para toda la ciudadanía.

El mejor ejemplo de presencia institucional y de acceso oportuno a la justicia, es la figura del Inspector de policía; de contar con esta figura en cada Centro Poblado, contribuiría enormemente para que el trámite de las conflictividades se haga a través de los procedimientos establecidos por la Ley, impidiendo que los grupos armados ilegales, como las Facciones disidentes de las FARC, se abroguen facultades de intervención, dirimiendo conflictividades de competencia institucional.

De otro lado, sus presupuestos fiscales responden al logro de indicadores de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo, que muchas veces no corresponde al cierre de las brechas sociales relacionados con los niveles de necesidades básicas insatisfechas y la pobreza multidimensional existentes y que afectan a la población residente.

Es pertinente la necesidad de contar con una mayor incidencia de los programas y entidades que conforman el Consejo Departamental de Política Social, como espacio intersectorial que reúne a las organizaciones del Estado y a los particulares, para desarrollar y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de estos municipios. Asimismo, las entidades que propenden por garantizar derechos a través Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el fin de proteger las/os niños/as, Adolescentes y Jóvenes.

4. CONDUCTAS VULNERATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL ESCENARIO DE RIESGO:

Cuadro 8. Homicidios en Uribe y Mesetas

Municipio	Homicidios 2018	Homicidios 2019	Homicidios 2020	Total
Uribe	8	3	4	15
Mesetas	5	3	1	9
Fuente Defensoría del Pueblo a partir de datos PONAL				

- Homicidios

A partir de estos datos que arrojan las cifras de la Policía Nacional y monitoreo del SAT, uno ocurrió en el área urbana de Mesetas y el resto de homicidios se presentaron en zonas rurales; lo anterior da cuenta de la dinámica de vulneración para comunidades campesinas ubicadas en zonas rurales de estos municipios; como se indicó, es en estos lugares donde actualmente las Facciones disidentes de las FARC frente 40 predominan.

-Desplazamientos Forzados

Según datos de la FGN en lo que respecta a los casos por Desplazamiento Forzado, se tienen 14 noticias criminales para Mesetas y 28 para Uribe durante el lapso comprendido entre noviembre de 2017 a abril de 2020; un total de 42 casos denunciados, advirtiendo un subregistro toda vez que muchas personas omiten denunciar por temor a las consecuencias adversas contra su integridad personal. De los 42 casos se tienen 33 Activos, 9 Inactivos, 41 en Indagación y 1 en Juicio.


Cuadro 9. Registro de desplazamientos en Uribe y Mesetas

Municipio	Delito	Total casos entre 11/2017 a 04/2020	Activos	Indagación	En Juicio	Inactivos
URIBE	Desplazamiento Forzado	28	21	27	1	7
MESETAS	Desplazamiento Forzado	14	12	14	0	2

Fuente: FGN, mayo 2020

Según monitoreo del SAT, la mayoría de casos de desplazamiento forzado surgen como consecuencia de afectaciones a los Derechos sobre la Tierra y la gran mayoría acontecen en la jurisdicción del municipio de Uribe; en el cuadro 9 se observa que Uribe duplica a Mesetas en casos denunciados, lo que indica, el nivel de focalización de ésta conducta vulneratoria. El principal responsable de dichos desplazamientos, corresponde a las Facciones Disidentes de las FARC Frente 40.

La información correspondiente a los hechos ocurridos en el marco del escenario de riesgo para los municipios de Uribe y Mesetas, también se ha registrado en el Cuadro 10

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 60 de 75

y corresponde al ANEXO 1 de la presente Alerta Temprana, el cual se adjunta y se considera parte integral del presente documento de Advertencia.

ESCENARIO DE RIESGO.


Por lo anteriormente descrito, de continuar las actuales condiciones y circunstancias coyunturales, soportadas en los factores estructurales y dinamizadores del riesgo, en la jurisdicción de los municipios Uribe y Mesetas, es altamente probable que el frente 40 de las Facciones Disidentes de las FARC logre un mayor fortalecimiento de sus estructuras armadas con lo cual acentúe su injerencia en la vida social, política, económica y cultural de los habitantes de estos dos municipios. Asimismo, pueda configurar la estructura de bloque que tanto anhela, para restaurar el orden social violento que impuso las FARC EP durante su existencia, con altas probabilidades de expandirse hacia el altiplano a través de la Cordillera Oriental.

Por tanto, es también factible que realicen eventuales incursiones con apoyo de los otros frentes (Séptimo y Primero), suscitando ataques armados contra la Fuerza Pública, atentados contra diferentes agencias del Estado y otras organizaciones de orden internacional, con el fin de entorpecer sus programas y proyectos.

No es desdeñable que grupos Sucesores del paramilitarismo, como el Bloque Meta y las AGC, también puedan realizar incursiones a las cabeceras y centros poblados de Uribe y Mesetas, como también de las veredas aledañas a los municipios de Lejanías, San Juan de Arama y Visitahermosa. De hacerlo, pueden cometer hechos violentos que vulneren los derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad personal de la población civil de estos municipios.

Los derechos humanos en riesgo de vulneración, se pueden perpetrar a través de homicidios (selectivos y múltiples), desapariciones forzadas, afectaciones como consecuencia de las acciones bélicas (accidentes por minas y/o armas trampa y MUSE, enfrentamientos con interposición de población civil), utilización de métodos para generar terror e intimidación en la población civil (amenazas mediante panfletos, mensajes de texto y verbales), afectación de bienes civiles, desplazamientos forzados y reclutamientos forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y utilización ilícita de los niños en el conflicto armado.

En éste mismo contexto, se advierte la continuación de prácticas como el despojo y/o desalojo de propiedades rurales, mediante el uso de métodos legales e ilegales, así como mediante la imposición violenta de pautas y patrones de conductas individuales y colectivas, movilización social, organización colectiva y adscripción política, con el objetivo de garantizar una recomposición social territorial que permita la reproducción de las condiciones de inseguridad propias del conflicto armado, se preserve la economía derivada de los cultivos ilícitos y se mantengan los corredores para el tráfico de estupefacientes.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 61 de 75

Dichas conductas pueden afectar especialmente a Campesinos, Comunidades indígenas, Líderes/as sociales, comunales y ambientales, Personas en proceso de reincorporación a la vida civil, Población socialmente estigmatizada, Niños, niñas, adolescentes y jóvenes y Servidores públicos.

ESTA ALERTA SUBSUME LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES QUE SE HAN EMITIDO PARA LOS MUNICIPIOS URIBE Y MESETAS, EN ESPECIAL EL INFORME DE RIESGO No. 047-18 A.I. DEL 28 DE MAYO DE 2018.

NIVEL DE RIESGO: ALTO


AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS

AUTORIDADES CIVILES: Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa; Ministerio de Educación; Ministerio del Medio Ambiente; Alta Consejería para el Posconflicto; Oficina del Alto Comisionado para la Paz; FONDOPAZ; Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia; Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos; Agencia de Renovación del Territorio; Agencia para la Reincorporación y la Normalización; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Comisión Intersectorial para la Prevención y Utilización de NNA; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (CORMACARENA); Parques Nacionales Naturales de Colombia; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Superintendencia de Notariado y Registro; Unidad de Restitución de Tierras; Unidad Nacional de Protección; Agencia Nacional de Tierras; Gobernación del Meta; Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas, Personerías Municipales de Uribe y Mesetas.

FUERZA PÚBLICA: Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares; Cuarta División del Ejército Nacional; Armada Nacional; Policía Nacional; Departamento de Policía Meta; Comando de Policía Uribe, Comando de Policía Mesetas.


RECOMENDACIONES

La presente Alerta Temprana bajo los presupuestos normativos establecidos en el Decreto 2124 de 2017 por el SAT de la Defensoría del Pueblo. Tiene por objeto activar el Sistema de Prevención Rápida en los Municipios de Uribe y Mesetas, ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal, así como a los derechos las libertades civiles y políticas e infracciones al DIH, derivados de la presencia y actividad de las organizaciones armadas ilegales, por lo que se solicita a la CIPRAT del Ministerio del Interior la adopción de medidas integrales efectivas para disuadir, mitigar o controlar el riesgo que hoy afecta a la población civil de los municipios objeto de la Alerta. También se solicita que cada entidad en respuesta a las

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 62 de 75

recomendaciones que se citan a continuación, se encuentren enmarcadas en la focalización contenida en la presente Alerta Temprana, detallando dicha gestión en los informes periódicos que se presenten a la Defensoría del Pueblo. Lo anterior considerando las medidas contingentes de aislamiento establecidas por el Gobierno nacional para evitar el contagio del COVID 19. En especial se recomienda:

1. A la **CIPRAT**, coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten urgentemente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas.
2. A la **CIPRAT**, dar trámite, de manera inmediata, a las acciones y requerimientos de las entidades y autoridades competentes en el nivel nacional y territorial vinculados con la presente Alerta Temprana, así como a las informaciones y requerimientos provenientes de instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos de los municipios de Uribe y Mesetas.
3. A la **CIPRAT**, convocar al Comité Departamental y Municipal de Alerta Temprana para la Reacción Rápida, con el fin de realizar el seguimiento pertinente a las acciones desarrolladas frente a las recomendaciones emitidas en la presente Alerta Temprana.
4. A la **CIPRAT**, propiciar y desarrollar los mecanismos de coordinación entre el Comité Departamental de Alerta Temprana para la Reacción Rápida y el Subcomité de Prevención, en los términos del artículo 12 de Decreto 2124 de 2017.
5. **Al Comando de Policía Departamental del Meta, en coordinación con la Cuarta División del Ejército**, reforzar las medidas de protección dirigidas a los habitantes del municipio de Uribe y Mesetas, con el fin de garantizar mayor presencia institucional en cascos urbanos y veredas, y la protección de los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y la libre movilidad, entre otros, con plena observancia de los Derechos Humanos y el DIH en sus operaciones.
6. **A la Policía Nacional, en coordinación con las Alcaldías de Uribe y Mesetas, la Gobernación del Meta y el Ministerio de Defensa**, promover el aumento de puntos permanentes y de atención al ciudadano, el fortalecimiento de unidades de Policía de Infancia y Adolescencia, el incremento del pie de fuerza, y el fortalecimiento logístico y presupuestal de las unidades de investigación criminal (SIJÍN), con el propósito de contribuir efectivamente a la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales y prevenir la ocurrencia de hechos victimizantes.
7. **A los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), adscritos a la Cuarta División del Ejército y el Departamento de Policía del Meta**, realizar campañas periódicas de divulgación de rutas de atención a víctimas de extorsión y secuestro, y adelantar las acciones necesarias de promoción de la denuncia, con grandes, medianos y pequeños comerciantes, productores, transportadores y, en general

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 63 de 75

con los sectores productivos y los habitantes de los cascos urbanos y veredas de los municipios en situación de riesgo.

8. **A la Fiscalía General de la Nación, desde el nivel Nacional y la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio**, dar trámite a las investigaciones y procesos adelantados frente a los hechos ocurridos en el marco del escenario de riesgo descrito en la presente Alerta Temprana, bajo los parámetros contemplados en la ley 1908 del 9 de julio de 2018.

9. **A la Gobernación del Meta y a las Alcaldías de Uribe y Mesetas**, coordinar con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, la promoción y el desarrollo de estrategias y acciones destinadas a fortalecer la cultura de paz, la convivencia y el respeto por los Derechos Humanos en los tres municipios abordados en la presente Alerta Temprana.


10. **A la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA)**, destinar los recursos financieros y humanos necesarios que garanticen la territorialización de las estrategias, planes y programas de prevención del reclutamiento y utilización de NNA para los municipios de Uribe y Mesetas, en observancia del enfoque diferencial étnico y de género.

11. **A la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA)**, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), promover acciones que permitan la identificación de factores de riesgo y de protección que inciden en el fenómeno de reclutamiento y utilización de NNA en los municipios de Uribe y Mesetas.

12. **Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**, en coordinación con el Ministerio de Educación, implementar estrategias efectivas de prevención del reclutamiento forzado y la utilización de NNA por parte de los grupos armados ilegales, que trasciendan la oferta institucional de los programas regulares que actualmente se encuentran en ejecución en los municipios de Uribe y Mesetas, y que contemplen el enfoque diferencial étnico y de género.

13. **Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**, a las Alcaldías Municipales y a las Comisarías de Familia de Uribe y Mesetas, verificar y atender, en el marco de sus competencias, los hechos de violencia (cultural, estructural y directa), materializados en contra de los NNA y en este sentido, diseñar e implementar estrategias destinadas a prevenir este tipo de situaciones.

14. **Al Ministerio del Interior, la Gobernación del Meta, las Alcaldías Municipales y las Personerías de Uribe y Mesetas**, promover acciones de coordinación interinstitucional y con las comunidades para elaborar, actualizar y/o ajustar un plan de prevención y promoción de los Derechos Humanos y la observancia del Derecho

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 64 de 75

Internacional Humanitario. Lo anterior en los términos de los Decretos 1581 de 2017 y 660 de 2018.

15. **Al Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas Rom y minorías), en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y la Gobernación del Meta,** activar la formulación y puesta en marcha de los Planes de Salvaguarda para las comunidades Embera y Nasa, según lo ordenado por la Corte Constitucional en Auto 004 de 2009 y en el marco del Decreto 4633 de 2011.

16. **A la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Gobernación del Meta y las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas,** adoptar medidas y acciones pedagógicas para garantizar, proteger y restablecer los derechos sobre la propiedad de la tierra de las personas víctimas de despojo y desplazamiento forzado.


17. **A la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos,** fortalecer, agilizar y promover la articulación institucional para el cumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en los municipios de Uribe y Mesetas, bajo los principios de desarrollo territorial, participación ciudadana, acción sin daño y planeación en la acción administrativa.

18. **A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Programa Descontamina Colombia en coordinación con la Gobernación del Meta, las Alcaldías de Uribe y Mesetas, la Policía Nacional y el Ejército Nacional,** articular las acciones necesarias para garantizar la implementación de actividades de Desminado Humanitario y Educación en Riesgo de Minas (ERM), en las jurisdicciones de Uribe y Mesetas.

19. **A la Agencia de Renovación del Territorio,** continuar y fortalecer la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los municipios de Uribe y Mesetas, bajo los principios de desarrollo territorial, participación ciudadana, acción sin daño y planeación en la acción administrativa.

20. **A CORMACARENA y Parques Nacionales Naturales, en coordinación con la Fuerza Pública y las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas,** coordinar las acciones necesarias para prevenir la tala ilegal y la ocupación indebida en las zonas declaradas como protegidas, tomando las medidas correspondientes ante la comisión de delitos ambientales y aplicando la prevalencia de los Derechos Humanos.

21. **A Parques Nacionales Naturales y COORMACARENA, en coordinación con el Ministerio del Medio ambiente, la Fuerza Pública y las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas,** coordinar las acciones necesarias para identificar y caracterizar los conflictos socioambientales existentes en el área e implementar estrategias de comunicación e instancias de facilitación y participación para dar solución a las tensiones suscitadas por el uso de la tierra y la explotación de los recursos naturales.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 65 de 75

22. **A la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)**, fortalecer técnica y administrativamente los Consejos Territoriales de Reincorporación, así como su capacidad de articulación interinstitucional a nivel municipal, departamental y nacional. De igual manera, diseñar e implementar acciones pedagógicas en resolución de conflictos dirigidas a los excombatientes, con el fin de promover la convivencia pacífica y respetuosa al interior de los AETCR, las Zonas Aledañas y las comunidades.

23. **Se reitera a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a la Gobernación del Meta, a las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y a la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación**, desarrollar las acciones que permitan adelantar, bajo un enfoque de Derechos Humanos, el proceso de reincorporación socioeconómica de los excombatientes que se encuentran dentro y fuera de los AETCR y las Zonas Aledañas.


24. **A la Unidad Nacional de Protección (UNP)**, recibir y tramitar las solicitudes de protección individuales, colectivas y de emergencia, y activar la presunción constitucional de riesgo en los casos que se requieran; lo anterior, en coordinación con las Autoridades locales, la Policía Nacional, las organizaciones sociales y comunitarias y los reclamantes de tierras. De igual forma, verificar que los esquemas de protección adoptados sean procedentes con el contexto y las dinámicas del conflicto, ejerciendo un rol activo en la identificación de personas y colectivos que puedan estar en riesgo.

25. **A la Unidad Nacional de Protección (UNP), acompañar y asesorar a las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas**, en la construcción de un procedimiento que permita orientar y brindar información sobre los servicios institucionales dirigidos a proteger a las personas y a las comunidades en situación de riesgo, en el marco de lo estipulado por el Decreto 1581 de 2017.

26. **A la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz**, determinar las medidas de protección aplicables a la población focalizada en la presente Alerta Temprana que puedan tener la condición de víctimas, testigos o intervinientes en el marco de los procesos judiciales de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

27. **A la Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)**, adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas en proceso de reintegración y reincorporación que han sido víctimas de amenaza, verificando que los esquemas adoptados sean procedentes con el contexto y las dinámicas del conflicto armado en el departamento.

28. **Al Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería de Colombia), y Migración Colombia, en articulación con la Gobernación del Meta y las Autoridades Municipales de Uribe y Mesetas**, para que en el marco de las recomendaciones establecidas en el CONPES 3950 de 2018, faciliten y articulen los procesos de legalización e identificación de la población proveniente de Venezuela que habita en la zona.

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 66 de 75

29. A la **Gobernación del Meta y a las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas**, gestionar ante las instituciones del nivel nacional la obtención de recursos que permitan el mejoramiento de la infraestructura vial que comunica a estos municipios con el resto del país.

30. Al **Ministerio de Justicia, en coordinación con las Alcaldías Municipales de Uribe y Mesetas**, implementar los Sistemas Locales de Justicia, mediante el desarrollo de estrategias colaborativas entre el Estado, los operadores de justicia y la comunidad, reconociendo las necesidades de cada territorio y asegurando respuestas efectivas y oportunas a los ciudadanos.


31. A la **Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas**, valorar de manera prioritaria las declaraciones que le sean remitidas por el Ministerio Público, con ocasión al escenario de riesgo descrito en la presente alerta y conforme a las disposiciones legales contenidas en la Ley 1448/11, sus Decretos reglamentarios y las Sentencias de la Corte Constitucional. Así mismo, brindar atención oportuna y coordinada a las emergencias humanitarias que se susciten en el territorio con ocasión de la dinámica del conflicto armado, otorgando las ayudas humanitarias correspondientes.

32. A las **Personerías municipales de Uribe y Mesetas**, como agentes del Ministerio Público, vigilar las acciones de las diferentes entidades y organismos del Estado, con miras a la prevención de los escenarios de riesgo advertidos en esta Alerta Temprana. Asimismo, remitir oportunamente al SAT copia de las quejas, denuncias o demás informaciones relacionadas con situaciones de Amenaza a los Derechos a la Vida, Libertad, Integridad y Seguridad de la población, de sus libertades Civiles y Políticas e infracciones al DIH.

33. A **todas las autoridades civiles, a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad del Estado concernidos**, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución Política de 1991 y a los artículos 15 y subsiguientes de la Ley 24 de 1992, informar al SAT de la Defensoría del Pueblo a la mayor brevedad y periódicamente, las actuaciones y medidas derivadas de la presente Alerta Temprana, y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita en este Documento de Advertencia

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo


	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 67 de 75

ANEXO 1 ALERTA TEMPRANA N° 026-2020

A continuación, se muestran las afectaciones a los Derechos Humanos de la población Civil e infracciones al DIH monitoreados por el SAT de la Defensoría del Pueblo dentro de las Jurisdicciones de los municipios de Uribe y Mesetas. La descripción de los hechos se compiló en orden cronológico iniciando por el más recientemente ocurrido hacia fechas anteriores.


Fecha	Municipio	Descripción
12 de junio de 2020	Uribe	En horas de la tarde del viernes 12 de junio de 2020 se presentó el desplazamiento masivo de 28 personas desde la Zona Aledaña El Diamante, Ubicada en la vereda el Vergel del municipio de Uribe hasta el casco urbano del municipio de Mesetas. De las 28 personas: 17 tienen calidad de PER, las otras 11 son familiares de éstos incluyendo 5 menores, 3 trabajadores y un hombre del esquema de protección. El desplazamiento masivo estuvo precedido de la emisión de un comunicado de la Comunidad y Directiva NAR El Diamante - DAINCOOP; el cual da cuenta de las razones que motivaron dicho desplazamiento como consecuencia del escenario de riesgo que estaban afrontando.
12 de junio de 2020	Mesetas	En horas de la madrugada del día 12 de Junio de los corrientes, dentro del AETCR Mariana Páez, ubicado en la vereda La Guajira del municipio de Mesetas, se presentó el homicidio del Joven Bayron Eliecer Gómez Restrepo identificado con cc n° 1121419970, su cuerpo sin vida fue encontrado dentro de las instalaciones del AETCR La Guajira conocido también como Mariana Páez, al parecer la muerte fue causada producto de heridas con arma blanca, según indagaciones preliminares se há logrado establecer que a la víctima se le estigmatizaba por presuntamente ser consumidor de sustancias psicoactivas.
30 de mayo de 2020	Uribe	El sábado 30 de mayo de 2020 en zona rural apartada de la vereda las Gaviotas, se presentó el homicidio del señor Benedicto Pulido Vargas, identificado con CC N°1022988280, natural del municipio de Mesetas, el cuerpo presentó 3 impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, el SAT se encuentra en monitoreo del caso.
14 de mayo de 2020	Uribe	A las 2:50pm aproximadamente del día jueves 14 de mayo de 2020, en inmediaciones del punto conocido como el Planchón de la Vereda Brisas del Guayabero municipio de Uribe, se presentaron combates entre El Ejército Nacional Batallón de Despliegue Rápido N°1 FUDRA 1 contra el GAO facciones Disidentes de las FARC Frente 40, como producto de los combates resulto muerto el soldado profesional Gerley Sánchez. En archivos de video allegados al SAT se observa la proximidad de los combates al caserío del Planchón, en donde se encontraba alojada población civil incluyendo Niños.
		El día 11 de mayo de los corrientes, se presentaron 2

Fecha	Municipio	Descripción
11 de mayo de 2020	Mesetas	<p>Homicidios en zona rural del municipio de Mesetas, la primera víctima: fue el señor Humberto Leyva González, a quien apodaban Rajaleña. Aproximadamente a la 9:00pm en el polideportivo de la vereda Puerto Nariño del municipio de Mesetas, lugar a donde arribaron dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Los sicarios también hieren a la esposa de la víctima en el abdomen y a un hermano en una pierna. Los agresores emprenden la huida hacia el sur, vía San Isidro.</p> <p>La Segunda Víctima, Raúl David Tirado Torres, conocido como el Costeño. Aproximadamente a las 9:40 pm en el centro poblado de la Vereda San Isidro, ubicada a unos 4km aprox de Puerto Nariño, dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, arriban a una vivienda en donde se encontraba la víctima, los sujetos piden permiso para entrar a la vivienda con el pretexto de querer ver televisión, al ingresar aprovechan que la señora de la casa se levanta al parecer rumbo a la cocina, los sujetos disparan contra el señor Tirado Torres, uno de los disparos alcanzan a impactar en una pierna a la señora. (Los victimarios dejaron nota a mano en la que se identificaron como FARC EP y justificaron el crimen señalando a la víctima de Paramilitar, consumidor y expendedor de alucinógenos).</p>
11 de mayo de 2020	Uribe	<p>El 11 de mayo de los corrientes el ciudadano Venezolano Elí Isaías Arade Garrido, fue víctima de Homicidio, los hechos ocurrieron en la vereda Palestina de Uribe, según refiere el informe de fuente oficial. Sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, aproximadamente a las 6:30 pm arribaron a una finca ubicada en zona rural de la Palestina, caserío Comuneros, en donde se encontraba el ciudadano venezolano y le ocasionaron la muerte, al parecer el atentado se perpetró con arma de fuego de corto alcance. (Los victimarios dejaron nota a mano en la que se identificaron como FARC EP y justificaron el crimen señalando a la víctima de Paramilitar, consumidor y expendedor de alucinógenos).</p>
02 de mayo de 2020	Uribe y Mesetas	<p>Circulación de panfleto calendado el 28 de abril de 2020, del autodenominado frente 40 de las disidencias de las FARC, en el marco de la crisis por COVID-19 imponen toque de queda, restricciones para la población civil y transportadora, amenazan con declarar objetivo militar a quien no acate lo dispuesto por ellos.</p>
15 de Abril de 2020	Uribe	<p>El día 15 abril de 2020 se presentó dos homicidios en las veredas el Placer y uno más en la Vereda La Primavera, del municipio de Uribe. Las víctimas del Placer fueron identificadas como JHON JAIRO LONDOÑO BEDOYA, Cédula de ciudadanía No. 1123140850 de Uribe, persona en proceso de Reincorporación; PER ACTIVO y EMILIANO ZAPATA CARDENAS, Cédula de Ciudadanía 6250037 de Miraflores- Guaviare, persona</p>


	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 69 de 75

Fecha	Municipio	Descripción
		en proceso de reintegración PPR, con pérdida beneficios. La víctima de la Vereda La Primavera: No ha sido plenamente identificada. Según monitoreo realizado los presuntos autores de los homicidios son las Facciones Disidentes de las FARC - frente 40.
03 de abril de 2020	Uribe	El día 03 de abril de 2020 en la vereda Tierradentro, zona rural del municipio de Uribe - Meta, se presentaron combates entre la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y facciones disidentes de las FARC EP identificadas como frente 40, en dicho enfrentamiento resultó muerto el soldado profesional Jhon Henry Arroyo Cubillo, adscrito al Batallón Orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N. °1 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
03 de marzo de 2020	Uribe	El día 03 de Marzo de 2020, se presentó el homicidio del niño de 13 años de edad identificado como Jhon Alexander Bohórquez, a quien le propinaron un tiro en la cabeza, al parecer los hechos se presentaron mientras la víctima se dirigía a recibir clases en su colegio, según versiones de familiares de la víctima en la mañana el niño salió de su casa en la vereda La Palestina, montando su motocicleta, con la intención de dirigirse hasta el municipio de Uribe para iniciar sus clases como, lo hacía a diario en el colegio.
03 de febrero de 2020	Uribe	En horas de la mañana del día lunes 03 de Febrero de 2020, en inmediaciones de la vereda el Diviso sobre la vía que conduce de ésta al casco urbano del municipio de Uribe, el señor Miguel Oliveros, actual Concejal del municipio de Uribe, fue víctima de atentado en el que sufrió heridas propiciadas con arma de fuego, el Concejal Oliveros recibió al parecer 2 impactos de bala uno en el pecho y otro en el abdomen
22 de enero de 2020	Mesetas	El día 22 de enero de 2020, se reporta la muerte del señor Duver Esneider Solano Sánchez, exintegrante de las FARC EP en proceso de reincorporación, en hechos que acontecieron al interior del establecimiento "Gallera Oswaldo", ubicado presuntamente al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación "Mariana Páez", en el municipio de Mesetas. Los hechos preliminares dan cuenta de una disputa que tuvo lugar con otro excombatiente de la antigua organización guerrillera, señor José Pastor Calderón, quien forma parte de la Subdirección Especializada de la UNP, cumpliendo funciones como integrante del esquema colectivo de protección, hechos poco claros, el señor Solano agredió físicamente al señor Calderón, propinándole un golpe con una botella en la cabeza, ante lo cual el señor Calderón reaccionó, accionando su arma de dotación y propinándole tres impactos de bala a la altura del tórax al señor Solano, ocasionando su deceso.
		A las 9pm del Jueves 24 de Octubre de 2019, hombres encapuchados y armados ingresaron intempestivamente a una vivienda ubicada dentro del antiguo ETCR denominado la


Fecha	Municipio	Descripción
24 de octubre de 2019	Mesetas	Guajira-Buena Vista, también conocido como Mariana Páez, jurisdicción del municipio de Mesetas Meta, en cuyo interior se encontraba el señor Alexander Parra, conocido como Rodolfo Fierro, excombatiente de las FARC EP, actualmente en proceso de Reincorporación, los encapuchados le propinaron 6 impactos de proyectiles con arma de fuego causándole la muerte.
2 y 3 de mayo de 2019	Uribe	El 2 de mayo de 2019 cerca de las 10:55 a.m., explotó un artefacto explosivo improvisando en el polideportivo del casco urbano del municipio de Uribe, causando heridas a siete personas, incluyendo dos miembros de la fuerza pública y un niño de siete años, así como numerosos daños materiales. El viernes 3 de mayo de 2019, mientras se realizaban labores de barrido, el Equipo Antiexplosivos de la Fiscalía identificó una segunda carga explosiva a tres metros de donde se produjo la explosión inicial, procediendo a su desactivación de manera controlada. Este último artefacto, de fabricación artesanal y con mecanismo remoto de fabricación, habría estado conformado por cuatro granadas y tendría un alcance de detonación de 80 metros aproximadamente.
26 de abril de 2019	Uribe	El 26 de abril de 2019 en la vereda El Edén jurisdicción del municipio de Uribe, fue secuestrado un ciudadano por parte de varios sujetos motorizados, quienes atacaron la camioneta en que la víctima se movilizaba. El ciudadano fue liberado el día 28 de abril de 2019 en el sector El Diviso- El Paraíso. Versiones comunitarias mencionan a las disidencias de las FARC como responsables de lo sucedido.
01 de abril de 2019	Mesetas	El 1 de Abril de 2019 jurisdicción del municipio de Mesetas, el Presidente de una de las JAC y líder comunitario, recibió amenaza telefónica por parte de sujetos no identificados quienes le advierten que lo van a matar de seguir adelantando actuaciones en el marco del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
10 y 14 de enero de 2019	Uribe y Mesetas	Los días 10 y 14 de enero de 2019, funcionarios de la organización de desminado humanitario The HALO Trust asentados en la zona de Mesetas y Uribe (Departamento del Meta), recibieron amenazas telefónicas por parte de un hombre que se identificó como perteneciente a las disidencias del Frente 40 de las FARC-EP, quien habría señalado que de continuar con el proceso de desminado en la zona referida, se producirían ataques contra la vida e integridad del equipo humano de The Halo Trust. Existe antecedente de fecha 18 de julio de 2018, en la vereda Santander del municipio de Uribe, en el departamento del Meta, un grupo armado conformado por cerca de 15 hombres uniformados detuvieron a un equipo de Estudio No Técnico (ENT) de HALO Trust, conformado por cuatro (4) personas, obligándolos a abandonar el vehículo en que se movilizaban y procedieron a quemarlo.
		El día 15 de diciembre de 2018 en inmediaciones de la vía que

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 71 de 75

Fecha	Municipio	Descripción
15 de diciembre de 2018	Mesetas	conduce de la vereda Oriente a la vereda Puerto Nariño, jurisdicción del municipio de Mesetas - Meta, fue encontrado el cuerpo sin vida de JAIME JOSÉ BERRIO VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía 1.117.814.670, de 23 años de edad conocido como alias "RAMIRO RONDÓN" ex integrante de las FARC EP, reincorporado, vinculado al ETCR de ese municipio. Mediante la inspección técnica al cadáver, se determinó que éste presentaba 7 impactos de bala, 5 de ellos en la cabeza y 2 en el brazo Derecho.
21 de noviembre de 2018	Uribe	El 21 de Noviembre de 2018, en inmediaciones de la vereda la Explanación jurisdicción del municipio de Uribe fue encontrado el cadáver del señor Sebastián Coy Rincón, miembro del movimiento FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC - META, excombatiente de las FARC EP, vinculado al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, el señor Sebastián Rincón, al parecer se encontraba desaparecido desde el día 15 de Noviembre de 2018 y posteriormente, el día 21 de Noviembre su cuerpo fue hallado sin vida, al respecto, el cadáver presentaba varios impactos con arma de fuego y presuntamente cerca de un campamento militar según fuentes de la Defensoría del Pueblo.
28 de agosto de 2018	Mesetas	Desde el día 28 de agosto de 2018 y durante el mes de septiembre se viene distribuyendo vía virtual un panfleto por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el cual se mencionan más de cincuenta personas por su nombre o por su apodo, quienes presuntamente viven en los municipios de Lejanías, Granada, Fuente de Oro, Puerto Rico, Puerto lleras, Mesetas, San Juan de Arama y San Martín. A todos ellos los conminan a desplazarse de sus residencias a partir del 15 de septiembre, so pena de atentar contra su vida e integridad.
07 de agosto de 2018	Uribe y Mesetas	El 7 agosto de 2018 se recibe información de la circulación, por medio de redes sociales, de un segundo 'Boletín informativo' sellado con el emblema de las FARC-EP en donde se anuncia la declaración de objetivo militar a la población socialmente estigmatizada (consumidores de droga o delincuentes), en especial a tres personas en esta oportunidad a quienes identifican por su alias o nombre. Las conminan a salir del territorio en un término de 48 horas o de lo contrario se les considera objetivo militar. Todo lo anterior lo justifican como acciones para lograr seguridad y tranquilidad en el territorio de la inspección de La Julia (Uribe) y Puerto Nariño (Mesetas). Como antecedente del hecho se encuentra otro boletín informativo del 29 de julio de 2018. Como consecuencia del hecho (8) personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, entre los que se encuentran dos menores de edad.
29 de julio de 2018	Uribe y Mesetas	El 29 de julio de 2018 se recibe información de la circulación, por medio de redes sociales, un 'Boletín informativo' sellado con el emblema de las FARC-EP en donde se anuncia la declaración de objetivo militar a la población socialmente


	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 72 de 75

Fecha	Municipio	Descripción
		estigmatizada (consumidores de droga o delincuentes), en especial a cinco personas a quienes identifican por su alias o nombre. Las conminan a salir del territorio en un término de 48 horas o de lo contrario se les considera objetivo militar. Todo lo anterior lo justifican como acciones para lograr 'seguridad y tranquilidad' en el territorio de la inspección de la Julia (Uribe) y Puerto Nariño (Mesetas).
22 de Julio de 2018	Uribe	El 22 de julio de 2018, en un establecimiento comercial ubicado en la vereda Brasil (Uribe - Meta), dos hombres en posesión de armas de fuego y encapuchados irrumpieron y perpetraron el homicidio de Sergio Luis Bravo Ochoa, c.c. No. 1.123.140.033, y Carlos Sthyvens Romero Cuellar, c.c. No. 1.119.946.262. Según las fuentes del SAT de la Defensoría, los hechos pueden involucrar al Frente Tercero de las Disidencias de las FARC - EP. Los agresores aseguraron pertenecer al grupo armado ilegal referido y señalaron que no querían ver marihuaneros ni ladrones en la zona.
18 de julio de 2018	Uribe	Según el comunicado de prensa de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona, cerca de las 2:30 de la tarde del 18 de julio de la presente anualidad, en la vereda Santander (Uribe - Meta), un grupo armado ilegal de aproximadamente 15 hombres uniformados detuvieron a un equipo de Estudio No Técnico (ENT), de la Organización Civil de Desminado Humanitario The HaLo Trust, conformado por cuatro (4) personas. El grupo armado ilegal obligo a los miembros de la organización de desminado a descender del vehículo y luego procedió a incinerarlo. Autoridades militares señalan que presuntamente la acción fue perpetrada por hombres de la disidencia de las FARC al mando de "alias" Calarcá. Este mismo grupo lanzó ultimátum a la organización de desminado señalando que 'no querían su presencia en los municipios de Mesetas y Uribe'.
16 de julio de 2018	Uribe - Mesetas - Lejanías	La Defensoría del Pueblo es informada de la circulación en redes y Whatsapp de un panfleto suscrito por el Bloque Occidental de las Águilas negras en que se lanzan amenazas entre otros, a las mesas de participación de víctimas de Mesetas, Uribe y Lejanías. En el documento se les sindicó de ser 'organizaciones y líderes' guerrilleros.
15 de julio de 2018	Mesetas	Indígenas de la comunidad 'Sol Naciente' asentados en el municipio de Mesetas fueron objeto de amenazas por terceros indeterminados, quienes por medio de mensajes de Whatsapp, los sindicaron de ser "auxiliadores de la guerrilla".
4 de julio de 2018	Mesetas - Uribe	Fuentes comunitarias e institucionales informan del homicidio del señor José Torbio Leiva Tocabia (Q.E.P.D.), indígena desplazado, identificado en vida con c.c. 17.285.695, en la Vereda Santa Helena, Municipio de Mesetas (Meta). Las mismas fuentes señalan que el señor Leiva Tocabia vivía en el Cabildo Indígena 'El Paraíso', ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre en Uribe (Meta). En proximidades de la vereda

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 73 de 75

Fecha	Municipio	Descripción
		Candilejas (Uribe-Meta), en el mes de agosto de 2017, recibe un atentado contra su vida quedando herido. Luego de su recuperación, sale desplazado y se dirige a la vereda Santa Helena, municipio de Mesetas, donde es ultimado a mediados del año 2018. Fuentes coinciden en señalar que el desplazamiento y homicidio fue perpetrado por hombres de la disidencia de las FARC-EP que accionan en el municipio de Uribe y Mesetas (Meta).
22 de junio de 2018	Uribe	En las inmediaciones de la Vereda la Espalda el señor Duberney Rivera recibió 18 impactos de fuego. El homicidio se relaciona con el tema de extorsión y refrendas por ocupación de baldíos; se atribuye la autoría a la disidencia de las FARC, frente 3.
19 de junio de 2018	Mesetas	Autoridades militares informan que en la vereda Alto Gobernador del municipio de Mesetas, tropas del ejército encontraron un total de 28 artefactos explosivos, tipo mina antipersonal envasada en tubos de pvc, tres cargas huecas, un kilo de úrea, dos barras de pentolita y 190 cartuchos calibre 5.56 milímetros. Señalan que los artefactos explosivos pertenecían a disidencias de las FARC - EP. Frente 40.
16 de junio de 2018	Uribe	A través de informaciones comunitarias, la Defensoría del Pueblo conoció que, el día 17 de junio de 2018, circuló en el casco urbano de Uribe un panfleto suscrito por la disidencia de las FARC-EP, al mando de alias 'Calarcá'. Bajo el rótulo de 'Boletín No. 4, dicha comunicación señaló como autores del desplazamiento masivo ocurrido el día 20/05/2018 en la Vereda Ativa, municipio de Uribe (Meta), a terceros actores y no a ese grupo armado ilegal.
6 de junio de 2018	Uribe	La Defensoría del Pueblo fue informada, el 6 de junio de 2018, a través de oficio, de la aparición de grafitis alusivos a Grupos Armados Pos Desmovilización de las AUC, en cercanías al Nuevo Punto de Reagrupamiento ubicado en la vereda la Pista, municipio de Uribe - Meta.
26 de mayo de 2018	Uribe	En una finca ubicada en la vereda Versailles, límites con la vereda Yavía, el día 26 de mayo de 2018, sobre las 3:10 p.m., fue víctima de homicidio el señor Fernando Quintana, identificado en vida con la c.c. 79.458.618. El señor Quintana vivía en el municipio de Villavicencio. Desde el año 2010 aproximadamente, pero viajaba cada mes a su finca, se atribuye el hecho a miembros de las disidencias de las FARC EP.
19 de mayo de 2018	Uribe	El día 19 de mayo de 2018, en las horas de la tarde, 25 familias (aproximadamente) que habían retornado por cuenta propia desde el mes de octubre de 2017 a sus predios, ubicados en la vereda Ativa, sector La Julia (Uribe) fueron objeto de amenazas e intimidación por parte de presuntos miembros del Frente 3 de la disidencia de las FARC EP. Esto produjo que las familias se desplazaran (aproximadamente 56 personas) hacia el caso urbano del municipio y a la Inspección de la Julia, tal hecho generó la emisión de AT047-18 de Inminencia

Fecha	Municipio	Descripción
15 de mayo de 2018	Uribe	A través del abonado, la Defensoría del Pueblo recibe una denuncia suscrita por personas en proceso de Reincorporación agrupados en el autodenominado en el Espacio Territorial Darío Gutiérrez, ubicado en la Vereda La Pista, Municipio de Uribe. Según se afirma en la misiva en los municipios de Mesetas y Uribe se advierte que desde septiembre de 2017 hay presencia de hombres armados, que se identifican como miembros de las AUC, que están planeando atentar contra la vida de integridad de las personas en proceso de reincorporación que se encuentra en estos municipios.
7 de mayo de 2018	Uribe	Fuentes comunitarias informaron al SAT de la defensoría del Pueblo del secuestro de un habitante del municipio de Uribe en inmediaciones de la inspección la Julia, los presuntos responsables fueron identificados como miembros del frente 3 de las Disidencias de las FARC.
4 de abril de 2018	Mesetas	Autoridades militares informan, en la vereda Brisas, sobre la destrucción controlada de un artefacto explosivo perteneciente a la disidencia de las FARC.
Febrero 01 de 2018	Uribe	Campesino de la zona rural de San Carlos, del municipio de Uribe fue objeto de amenazas y desplazamiento forzado. Según información recibida por el SAT de la Defensoría del Pueblo, los hechos victimizantes tienen como sustento un diferendo relacionado con la ocupación de un baldío. El ciudadano había retornado hace dos años al Municipio de Uribe y quince años atrás había sido desplazado por la guerrilla de las FARC-EP. Se presume que las amenazas y desplazamiento fueron producto del accionar de las disidencias de las FARC.
27 de enero de 2018	Mesetas	En la inspección de Murivá, en la carretera entre Uribe y Mesetas, fue incinerado un vehículo (bus) de transporte público. Este vehículo iba abordado por población civil. Los presuntos responsables (Disidencia de las FARC, Frente 40 o tercero), luego de hacer descender a los ocupantes del bus, le prendieron fuego. Los atacantes eran personas con armas largas. No se presentaron víctimas civiles, aunque el hecho causó temor entre los afectados. Las autoridades de policía confirmaron la quema del bus de servicio intermunicipal, adscrito a la empresa Flota La Macarena.
17 de enero de 2018	Uribe y Mesetas.	La defensoría del Pueblo es informada de un ataque perpetrado por presuntos disidentes de las FARC-EP a un vehículo tipo camión que transportaba tropas del Escuadrón Motorizado de Operación Rurales que se dirigía a prestar apoyo a las tropas que acompañaban las acciones de micro focalización, en el marco de procesos de restitución de tierras en el sector de La Julia. El ataque se produjo en el sector conocido como Jardín de Peñas, en la vía que conduce del Municipio de Mesetas a la Inspección de la Julia, municipio de Uribe.
21 de enero de	Uribe y	Según información de fuentes comunitarias e institucionales la disidente de las FARC, al mando de Miguel Botache Santillana,

	Nombre del proceso/subproceso: Prevención y Protección	Código:
		Versión:
		Página 75 de 75

Fecha	Municipio	Descripción
2018	Mesetas.	alias Gentil Duarte, ordenó un “Plan Pistola” contra integrantes de la fuerza pública en los municipios de Uribe, Mesetas y Vistahermosa.
8 de agosto de 2017	Uribe	Una adolescente de 13 años de edad perdió la vida en medio de un combate entre tropas del Ejército y disidentes del Frente 40 de las FARC-EP (autodenominado Frente Tercero). Los hechos ocurrieron en el sector de La Julia, donde al parecer esa disidencia estaba realizando cursos de entrenamiento para explosivistas. Allí se presentó un cruce de disparos donde murieron dos integrantes de esa estructura y la menor de 13 años. En el marco de la operación se logró incautar tres fusiles de asalto, una pistola 9 milímetros, una carabina, una granada de mano, 777 cartuchos de diferente calibre, 16 proveedores, material de comunicaciones y material de intendencia. Así mismo, es materia de investigación el delito de reclutamiento forzado.
4 de junio de 2017.	Uribe	En la Finca Los Aguacates, vereda La Primavera, es víctima de homicidio el señor Disney Castro Rubio, identificado con C.C. 86.006.916. El deceso se produjo por disparo de arma de fuego. Fuentes consultadas por el SAT de la Defensoría del Pueblo refirieron que los autores del hecho presuntamente pertenecían a disidencias de las FARC, quienes señalaban a la víctima como presunto colaborador de los grupos armados pos desmovilización.
8 de junio de 2017	Mesetas	El 8 de junio de 2017 en la vereda Santa Helena, municipio de Mesetas, tres hombres vestidos de negro, encapuchados y armados con fusiles ingresaron al campamento de la Organización Civil de Desminado Humanitario Ayuda Popular Noruega (APN), luego de amenazar a los miembros de los equipos de desminado que operaban en la zona prendieron fuego a uno de los vehículos de la organización. Los autores del hecho al parecer hacen parte de las facciones disidentes de las FARC al mando de alias Calarcá.
11 de marzo de 2017	El Dorado, El Castillo, Mesetas, San Juan de Arama	Por medio de panfleto que circulo en los municipios de El Dorado, El Castillo, Mesetas, San Juan de Arama; esta regional se conoció las amenazas lanzadas por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia realizan contra doce personas pertenecientes a grupos delincuenciales y población socialmente estigmatizada,
6 de junio de 2017	Uribe	Informan oficialmente las autoridades militares que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en desarrollo de operaciones militares, hallaron en la vereda el Tigre un depósito ilegal con abundante material de guerra perteneciente a la disidencia de las FARC - EP.